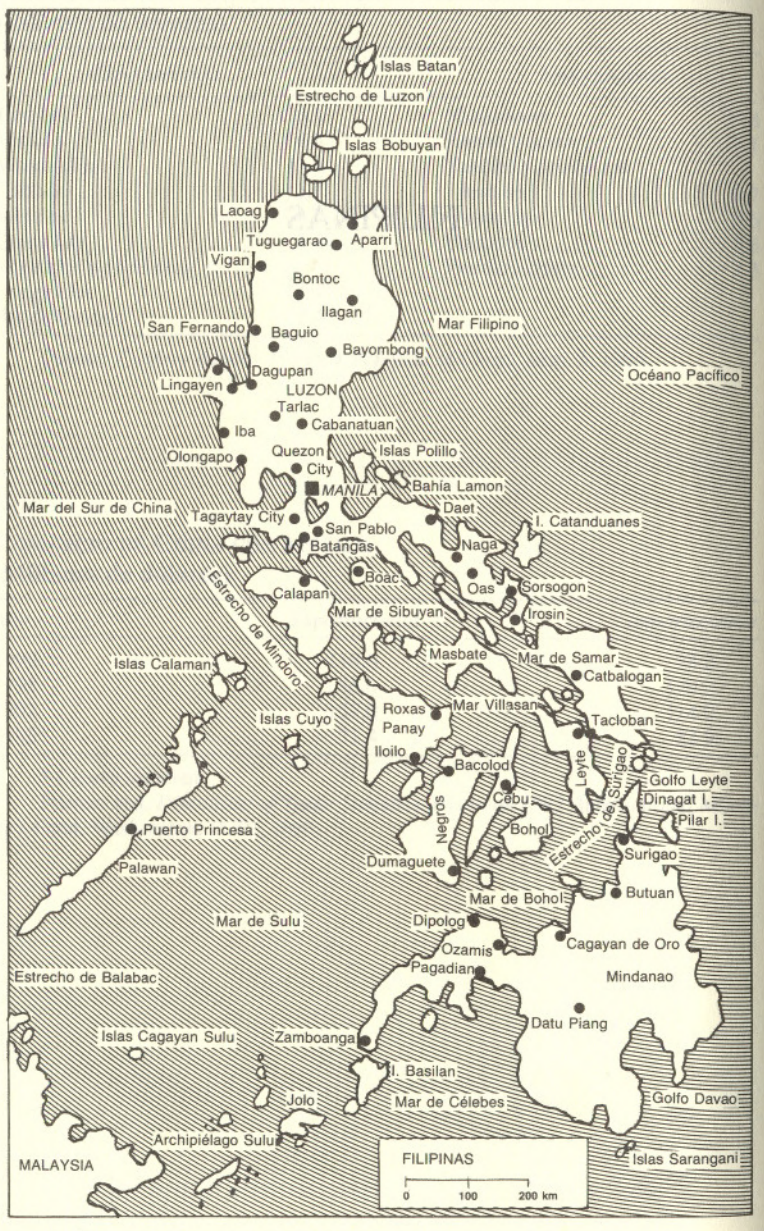
FILIPINAS



FILIPINAS

Asunción Benítez Rush
El Colegio de México

Situación sociopolítica

Una encuesta efectuada a escala nacional por la organización independiente Estación de Clima Social, con sede en la zona metropolitana de Manila, manifestó, en mayo de 1994, que la mayoría de los filipinos de las zonas rurales no había oído hablar acerca del programa "Filipinas 2000". El proyecto gubernamental integral fue lanzado en febrero de 1993 por el presidente Fidel Ramos para convertir a Filipinas en un "país de industrialización reciente" (PIR) en el próximo milenio. Los datos de la encuesta revelaron que, ya bien entrado el segundo año del régimen de Ramos, 74% de los entrevistados en Mindanao desconocían por completo los planes del presidente para la industrialización del país; lo mismo ocurría con 63% de la población rural de Visayas y con 55% de la correspondiente a la región de Luzón, pese a la amplia difusión dada al programa en los medios de comunicación de la zona metropolitana de Manila. Este hecho ha impulsado al franco arzobispo de Manila a acusar al gobierno de "gobernar por medio de comunicados de prensa".[1]

Programas insignia

En la actualidad, la nueva frase en boga dentro de los círculos del gobierno nacional es "programas insignia", con lo que se alude a los 32 programas prioritarios establecidos por la administración de Ramos para reconstruir la infraestructura y la industria del país. Con el objetivo de supervisar los ambiciosos trabajos de construcción, Ramos creó en enero

[1] *Philippine Daily Inquirer*, 30 de mayo de 1994.

el Comité Presidencial para los Programas y Proyectos Insignia. Integrado por los directores de siete departamentos gubernamentales, entre ellos la Autoridad para el Desarrollo Económico Nacional (NEDA),* el comité se reúne cada semana y funciona como un supraorganismo que ejerce presión sobre la burocracia para que agilice los proyectos. En ocasiones el propio presidente ha intervenido para dinamizar proyectos que avanzan con lentitud. El jefe del comité es Emilio Osmeña —exgobernador de la provincia de Cebú y candidato a la vicepresidencia derrotado en las elecciones de 1992, en las que se presentó como compañero de fórmula de Ramos—, reconocido como el arquitecto del reciente auge económico de la ciudad de Cebú, la segunda metrópoli en importancia del país.

Algunos proyectos insignia son las construcciones de un nuevo aeropuerto internacional en Manila, de un complejo petroquímico en la provincia de Bataán, de un aeropuerto y un puerto marítimo en la ciudad de Davao, de una acería integrada en Mindanao, de autopistas dentro y alrededor de la zona metropolitana de Manila, y la ampliación del sistema de tren ligero manileño (actualmente detenida por una demanda ante la Corte Suprema). La lista completa comprende 82 proyectos distintos, 49 de ellos ya se encuentran en construcción. Del costo total, estimado en 214 000 millones de pesos filipinos (8 000 millones de dólares estadunidenses), se espera que el sector privado aporte 127 000 millones, o 59%, básicamente por medio de acuerdos de construcción-operación-transferencia (BOT). Otros 51 000 millones de pesos se obtendrán mediante préstamos otorgados principalmente por el Fondo Japonés de Cooperación Económica Exterior, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, en tanto que el gobierno filipino proveerá los restantes 36 000 millones de pesos, equivalentes a 17% del costo estimado.

Adiós a la crisis energética

La administración de Ramos comprobó, en 1992, la eficacia de los acuerdos BOT, cuando consiguió resolver problemas financieros que le impedían solucionar la paralizante y generalizada escasez energética nacional. En 1990 el Congreso aprobó una ley sobre los BOT que relajaba las

* En adelante, cuando las siglas no correspondan a su nombre en español, significa que permanecen en inglés.

restrictivas normas que regían los contratos del sector privado con el gobierno. El 5 de mayo, la legislatura suavizó aún más esas regulaciones por medio de una enmienda a la ley, que ahora permite la construcción casi de cualquier clase de infraestructura —desde mercados populares hasta autopistas— mediante financiamientos BOT. También admite modalidades como la del plan de construcción-transferencia-operación y la del plan de construcción-propiedad-operación, la última de las cuales no exige al operador privado el traspaso final del proyecto al gobierno. Por ejemplo, la compañía Hopewell Holdings, con sede en Hong Kong, fue contratada por el gobierno filipino para construir rápidamente tres plantas eléctricas de 70 megawatts, y luego dos más pequeñas. El 28 de febrero, esta corporación ganó otro concurso para construir en Luzón una planta carboeléctrica de 1 000 megawatts de potencia —el mayor proyecto de esta índole en el país—, cuya operación estará en manos de dicha compañía por un periodo de 25 años a partir de su terminación, prevista para 1999.

En 1993 se activaron 11 plantas eléctricas con una capacidad generadora conjunta de 1 074 megawatts, y el inicio de las operaciones de otras está previsto para finales de 1994. Durante el verano se produjeron algunas interrupciones en el suministro de energía, pero no pueden compararse con los apagones del año pasado, que duraban entre ocho y diez horas diarias. Casi todas las nuevas plantas se han construido mediante planes BOT. En la actualidad hay 18 proyectos de este tipo, incluyendo aquellos que aún están en construcción, con un costo total de 66 000 millones de pesos. Sin los planes BOT, el gobierno, carente de liquidez, sencillamente no podría sufragar esa suma, que equivale al doble del presupuesto para infraestructura de 1994.

Polémica sobre la lotería primitiva

Aunque la popularidad del presidente Ramos se ha beneficiado de la solución dada por su gobierno a la crisis energética, también ha resultado empañada por la polémica surgida a raíz de una lotería computarizada estatal, la lotería primitiva, que él autorizó para aumentar los ingresos gubernamentales. Ramos contrató a tres compañías para manejar el sistema de apuestas: la Corporación Filipina de Administración de Juegos (PGMC), en Luzón; la G-Tech Philippines, en las Visayas y la Tanjong

Pub. Ltd. Co., en Mindanao.[2] En enero, una coalición amplia de grupos religiosos y organizaciones civiles, denominada Kilosbayan y dirigida por el exsenador Jovito Salonga, solicitó a la Corte Suprema la suspensión de la lotería primitiva, arguyendo los siguientes motivos: *1*) es inmoral, ya que explota a los pobres haciéndoles creer que pueden ganar el premio mayor; *2*) carece de la aprobación congresual de rigor, y *3*) es sospechosa de favoritismo político, dado que el principal consejero legal de Ramos, Antonio Carpio, inclinó deliberadamente la licitación en favor de la PGMC, dirigida por el antiguo secretario de Relaciones Exteriores, Raúl Manglapus, quien es partidario de Ramos y presidente de la Unión Nacional de Cristiano-Demócratas (NUCD), uno de los partidos de la coalición que en 1992 lo llevó a la presidencia.

Los observadores políticos opinan que Ramos desea legalizar la lotería primitiva con objeto de debilitar, y quizá erradicar, al *jueteng*, un juego ilegal que proporciona a quienes lo controlan una suma anual calculada en 50 000 millones de pesos (1 900 millones de dólares). El *jueteng* floreció durante la administración de Corazón Aquino. Se dice que recursos de esa procedencia alimentaron la campaña de uno de los oponentes de Ramos en los comicios de 1992.[3] Con la proximidad de las elecciones de 1995, los políticos enfrentados en este debate están ansiosos de controlar lo que podría ser una importante fuente de financiamiento para sus campañas. Sin amilanarse, Kilosbayan presentó otra demanda el 28 de marzo, en esta ocasión contra la Comisión de Valores y Cambios, alegando que la participación de la PGMC era fraudulenta (es propiedad de tres filipinos y del Malaysian Berjaya Group, que posee 40% de las acciones). A mediados de abril, la Corte Suprema dictaminó que el convenio sobre la lotería primitiva era ilegal y, en consecuencia, ordenó al gobierno suspender la aplicación de su contrato con la PGMC.

Programa de reforma social

A semejanza de lo acontecido en la Conferencia Económica Cumbre de septiembre de 1993, convocada para lanzar el Pacto Social para un Desarrollo Económico Potenciado (SPEED), el presidente citó en junio, en Malacañang, a funcionarios clave de los poderes ejecutivo y legislativo, a líderes comunitarios y a representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONGS), así como a los llamados sectores básicos, para dar a conocer su Programa de Desarrollo Humano y Reforma Social (HDSR). Diseñado para complementar las medidas económicas y fiscales del SPEED, el HDSR pretende promover "la comprensión de la situación socioeconómica de los sectores marginados de la sociedad" y "determinar acciones para mejorar su situación".[4] Se decidió intervenir en seis sectores básicos: *1*) campesinos y trabajadores rurales sin tierras; *2*) pescadores; *3*) pobres urbanos; *4*) comunidades culturales indígenas; *5*) trabajadores, en especial del sector informal, y *6*) grupos desfavorecidos, en los que se incluyen mujeres, jóvenes, discapacitados, ancianos y víctimas de catástrofes. El gobierno se guió por tres principios para definir los programas de intervención prioritarios: *1*) el acceso a los servicios básicos y a las oportunidades económicas; *2*) el desarrollo sostenible, y *3*) la participación popular. Se formuló una lista de medidas aplicables a cada unos de estos sectores.

El paquete de reformas sociales resultante consta de nueve "programas insignia", entre ellos, la intensificación del Programa Global de Reforma Agraria, la administración racional de los recursos acuáticos de 24 bahías de interés primordial y de 52 lagos de agua dulce, y una aplicación más expedita de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Orden Administrativa núm. 2 del Departamento del Ambiente y los Recursos Naturales, la cual estipula la demarcación de tierras ancestrales en cinco provincias de máximo interés. La agenda de actividades y el paquete de reformas sociales presentados a los participantes en el palacio presidencial, preparados de antemano, indican que el encuentro no fue convocado para tratar directamente los problemas de los sectores básicos, sino para recabar su apoyo al programa económico del gobierno. Pero, desde luego, la principal misión del presidente sigue siendo la promoción, a cualquier costo, de un crecimiento económico sostenido. El secretario ejecutivo, Teofisto Guingona, defendió más tarde la postura del gobierno, recalcando que "la dirección de la economía y la reforma social son los elementos fundamentales de nuestro programa nacional para lograr la estabilidad y el progreso".[5]

[2] Las dos últimas se fusionaron a principios de marzo para formar la Pacific On-Line Inc.

[3] *Far Eastern Economic Review*, 7 de abril de 1994.

[4] *Manila Chronicle*, 11 de junio de 1994.

[5] *Ibid.*, 23 de junio de 1994.

Política de coaliciones

Las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo han sido débiles desde la elección del presidente Ramos, por una pequeña mayoría, en 1992. La tenue influencia sobre ambas cámaras del Congreso, disfrutada por Ramos el año pasado, cuidadosamente pergeñada por sus partidarios, se evaporó con rapidez en 1994, sobre todo en la Cámara Alta. La desconfianza de los senadores hacia Ramos se tornó extrema cuando el presidente del Senado, José de Venecia, íntimo aliado de Ramos, inició en enero una intensa campaña para instaurar una legislatura unicameral. Sospechaban que Ramos pretendía prolongar su mandato (que concluye en 1998) convirtiéndose en primer ministro del organismo propuesto. Esta idea no era del agrado de los senadores, algunos de los cuales abrigan ambiciones presidenciales. El resultado fue la paralización de numerosos asuntos y un tedioso proceso de negociación política y de debates parlamentarios, ampliamente cubiertos por los medios de comunicación de Manila.

Un informe sobre el país, preparado en marzo por el Chase Manhattan Bank, con sede en Nueva York, describió al Senado como un "escollo [a las reformas], lo que quizá sea un reflejo de la falta de voluntad política para superar intereses creados".[6] Asimismo, en una encuesta aplicada en mayo a los 163 miembros del Club de Negocios Makati, el Senado mereció opiniones negativas que lo convertían en la segunda institución del país con menor prestigio, después de las dependencias encargadas del control del transporte.[7] Estos resultados ofrecían un marcado contraste con los de una encuesta efectuada en diciembre de 1993 por la Estación de Clima Social, en la cual el Senado obtuvo un "margen de satisfacción" de 30%, superior al otorgado al gobierno nacional o a la Corte Suprema.

La brecha entre Ramos y el Senado, integrado por 23 miembros (en condiciones normales son 24, pero uno renunció para incorporarse al gabinete presidencial), se ensanchó en julio debido a la inesperada protesta pública contra la ley de incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aprobada por el Congreso en fechas recientes. El Senado está dominado por 17 miembros del Laban ng Demokratikong Pilipino (LDP) considerado el partido de oposición por excelencia a la gobernante "Coalición Arco Iris". De pronto, incluso algunos senadores que habían

[6] *Far Eastern Economic Review,* 12 de mayo de 1994.

[7] La familiaridad con los terribles embotellamientos de tráfico de la zona metropolitana de Manila explicaría de sobra la impopularidad de esas instituciones.

votado en favor de la medida fiscal promovida por Ramos, comenzaron a criticarla. En la Cámara de Representantes, Ronaldo Zamora, quien se había pasado a las filas del partido Lakas-NUCD de Ramos tras las elecciones de 1992, renunció al liderazgo de la mayoría en el hemiciclo e ingresó en la Coalición Nacionalista Popular (NPC). Él y otros 19 miembros de la NPC abandonaron la "Coalición Arco Iris", argumentando su rechazo a la ley sobre el IVA. Sin embargo, un motivo más verosímil es que están tomando posiciones para las elecciones de 1995.

A fines de agosto se forjaron nuevas alianzas políticas, cuando Ramos anunció el "pacto para el cambio" entre el Lakas-NUCD y el LDP. Ambos partidos acordaron apoyar propuestas legislativas que el presidente estima urgentes para el país; y, lo que es más importante, la coalición acordó presentar una lista de candidatos común, dividida por igual entre los dos partidos, para las 12 curules senatoriales que se disputarán en las elecciones de mayo de 1995. En virtud de una disposición transitoria de la Constitución de 1987, los 12 senadores con más votación a su favor en los comicios de 1992 disponen de un mandato de seis años; mientras que los 12 restantes sólo cuentan con tres años y deberán competir con otros candidatos en las elecciones de mayo, esta vez para un periodo regular de seis años.

La lista común podría ser una bendición para los cuatro senadores del LDP que se presentan a la reelección, ya que podrán compartir los enormes recursos organizativos y financieros del partido gobernante en una campaña nacional cuyo costo se estima en 400 millones de pesos (15 millones de dólares) por candidato.[8] Los otros dos puestos correspondientes al LPD podrían cubrirlos el expresidente de la Corte Suprema, Marcelo Fernán (candidato a la vicepresidencia derrotado en las elecciones de 1992), y el representante Hernando Pérez, uno de los más enconados críticos de Ramos en la Cámara Alta. Si triunfan los seis candidatos del LPD, este partido disfrutará de una cómoda mayoría en el Senado. Respecto al líder del LPD, Edgardo Angara, presidente del Senado, esta alianza podría otorgarle poder de negociación suficiente para que Ramos lo designe su sucesor en los comicios presidenciales de 1998.

En cuanto a Ramos, la coalición le garantiza el apoyo del LPD y, por consiguiente, del Senado, por lo menos hasta las elecciones de mayo próximo. La lista común también mejorará las posibilidades de triunfo de seis de sus propios candidatos. Se estima que Ramos asignará los seis

[8] *Far Eastern Economic Review*, 8 de septiembre de 1994.

puestos del Lakas-NUCD a dirigentes de partidos más pequeños con el propósito de obtener su respaldo. No obstante, los observadores opinan que la coalición probablemente restringirá la presentación de una lista común a las elecciones senatoriales, debido al profundo antagonismo existente entre el Lakas-NUCD y el LPD en el ámbito local. La última conformación de la lista del Senado, conjunta quizá, sea la mejor ilustración de la máxima "no hay amigos ni enemigos permanentes, sólo intereses permanentes". Sin embargo, algunos analistas políticos, como Amado Doronila, abrigan la esperanza de que esta "política de coaliciones" represente la introducción en Filipinas de "un modelo de gobierno basado no en la mayoría absoluta sino en alianzas negociadas entre los principales partidos para controlar y ampliar el terreno común de la política".[9]

El "pacto para el cambio" marcó el fin de la "Coalición Arco Iris". La oposición estará representada ahora por la NPC, oficialmente encabezada por el senador Ernesto Maceda, pero aún controlada por Eduardo Cojuangco, antiguo compinche de Marcos, y por el Kilusang Bagong Lipunan (KBL), el moribundo partido de éste. Hay rumores acerca de una alianza entre la NPC, el KBL y el Partido Popular de la Reforma, el cual obtuvo pobres resultados en las elecciones congresuales de 1992, pero cuyo candidato presidencial consiguió un apretado segundo lugar.

Las dinastías políticas y el Nuevo Código Electoral

La cuestión de las dinastías políticas es otra manzana de la discordia entre personalidades de los poderes ejecutivo y legislativo. En agosto salió a la luz una profunda pugna entre la senadora Leticia Shahani, hermana mayor de Ramos, y el consejero de Seguridad Nacional, José Almonte, hombre de confianza del presidente, cuando Rosemarie Arenas, una mujer notable de Manila, en un discurso que recibió gran publicidad, calificó de "intento dinástico" a la campaña promovida por Shahani para llevar a su hijo Ranjit, actual vicegobernador de Pangasinán, a la gubernatura de la provincia. Los colaboradores de Shahani han acusado a Almonte de instigar la diatriba de Almonte contra la senadora.[10] En países como Filipinas, en los que las élites socioeconómicas dominan la política, las elecciones tienden a fomentar e incluso legitimar la sucesión dinástica.

[9] *Philippine Daily Inquirer*, 28 de agosto de 1994.
[10] *Far Eastern Economic Review*, 18 de agosto de 1994.

Esta forma de sucesión se nutre del "clientelismo" y, en muchos casos, de la coerción y la intimidación.

Si bien es cierto que la constitución filipina prohíbe las dinastías políticas, la definición legal del concepto de "dinastía" quedó pendiente. El presidente de la Comisión Electoral (Comelec), Christian Monsod, dijo en el Congreso que la prohibición de las dinastías, tal y como las interpreta el código electoral propuesto, no era aplicable a la candidatura de Ranjit. La sección 116 del nuevo código define las dinastías políticas como "la situación en la que personas vinculadas por un parentesco de tercer grado de consanguinidad o afinidad civiles desempeñan sucesivamente cargos electivos en una región, distrito legislativo, ciudad o municipio. Los cónyuges y los parientes políticos están comprendidos en esta restricción".[11] Monsod argumentó que esa prohibición no rige sobre el presidente, el senador y el vicegobernador debido a que sólo es aplicable a quienes desempeñan cargos locales que se sobreponen.

La Comelec está presionando al Congreso para que apruebe el nuevo código electoral, que consolida todas las leyes electorales y moderniza el proceso de los comicios. Ramos respaldó en dos ocasiones la propuesta presentada al cuerpo legislativo, calificándola de legislación "prioritaria" y "urgente". Pero, aduciendo "limitaciones de tiempo", el Congreso sólo aprobó cinco de las 40 disposiciones del nuevo código y pospuso para el próximo año la decisión sobre los demás. Las cinco normas aprobadas ordenan: *1*) la modernización del proceso electoral, incluida la computarización del padrón de votantes; *2*) la creación de un sistema de voto para los electores ausentes, que "provea un mecanismo para que el votante empadronado que el día de las votaciones no se encuentre en su lugar de registro, ya sea por sus obligaciones electorales o porque resida o trabaje en el extranjero, pueda participar en las elecciones nacionales"; *3*) el registro anual de los votantes, "destinado a erradicar la existencia de padrones de electores inflados o falsificados"; *4*) la introducción de un sistema de representación proporcional, con objeto de eliminar la representación inequitativa de los partidos marginales y los grupos sectoriales en la Cámara de Representantes, y *5*) el levantamiento de la limitación impuesta a los medios de comunicación de dar publicidad "sólo a los candidatos de las elecciones nacionales".

Es preciso señalar que el Congreso evitó pronunciarse sobre la norma contraria a las dinastías políticas, lo que los observadores atribuyen

[11] *Philipppine Daily Inquirer*, 13 de agosto de 1994.

al hecho de que muchos de los legisladores proceden de clanes políticos dominantes. Otras medidas pasadas por alto son: *1*) la prohibición de una "influencia eclesiástica indebida", que impide a los líderes de cualquier grupo religioso ejercer influencia sobre sus feligreses para que voten en favor o en contra de algún candidato de un partido político; *2*) el impedimento de que los funcionarios públicos y los candidatos cambien de afiliación partidaria en los seis meses previos a unas elecciones; *3*) la prohibición de cubrir, en una misma elección, candidaturas dejadas vacantes con personas que han abandonado una contienda electoral, y *4*) la penalización de algunos delitos electorales, como la coacción de funcionarios de la Comelec o el fraude informático.

Acoso sexual

La Colomec volvió a estar en el candelero en agosto, cuando una de sus comisionadas, Remedios Salazar Fernando, interpuso una denuncia por acoso sexual contra su colega Manolo Gorospe ante la junta directiva interna. Algunos senadores y grupos militantes de mujeres exigieron de inmediato la renuncia de Gorospe, destacando que el fenómeno es un problema común en los lugares de trabajo. A partir de entonces se han hecho públicos diversos casos de acoso sexual cometidos por igual en oficinas gubernamentales y privadas. El 11 de agosto, por ejemplo, una empleada de la Administración de Plantas Hidráulicas Locales (LWUA) presentó una denuncia contra la Comisión de Servicio Social (CSC), arguyendo que su supervisor había intentado meterse en su cama cuando se encontraban en un viaje oficial. Los empleados de la LWUA escenificaron luego una protesta de tres horas fuera de las oficinas para apoyar a su compañera y denunciar el generalizado acoso sexual contra las empleadas por parte de los funcionarios.

La CSC, dirigida por una mujer, es uno de los escasos organismos gubernamentales facultados para castigar a los infractores, pero no ha recibido muchas quejas. El Departamento de Trabajo y Empleo, también dirigido por una mujer, ha establecido políticas contra el acoso sexual, pero sólo aplicables a su propio personal. La Comisión Nacional sobre el Papel de la Mujer Filipina ha publicado un manual para ayudar a las mujeres y a los hombres a comprender el problema. Algunas organizaciones de mujeres han señalado que el acoso sexual es uno de los principales obstáculos que las trabajadoras de todas las clases sociales enfrentan hoy en día, pero la mayoría de los casos no se denuncian debido a

que, como ocurre con la violación, las mujeres son acusadas de provocarlo. Pese a que en el Congreso hay tres leyes contra el acoso sexual pendientes de sanción, los estatutos legales no contemplan hasta ahora dicho crimen. Sin embargo, en una decisión jurídica que sienta precedente, la Corte Suprema dictaminó en septiembre pasado que la comisión de actos de acoso sexual es causa válida de despido. El caso de referencia atañía a un administrador despedido de una compañía privada por ejercer "perversidad moral persistente contra sus subalternos".[12]

El Código de Gobierno Local en operación

Concebido para descentralizar el sistema gubernamental, fue promulgado por el Congreso en septiembre de 1991 y entró en operación en enero de 1992. En un ejercicio pionero que puso a prueba la cláusula de destitución contenida en el código, Leonardo Román destituyó a Enrique García como gobernador de Bataán, cuando a éste le quedaba menos de un año en el cargo. El 26 de junio, la Corte Suprema facultó a la Comelec para declarar a Román ganador de las elecciones especiales de destitución verificadas en la provincia. La sección 70 del código, especifica que "la destitución podrá ser promovida por una asamblea de destitución preparatoria o por los votantes registrados de la unidad de gobierno local a la que pertenezca el funcionario electivo sujeto a la destitución". La ley permite que una mayoría simple de los funcionarios electos de la unidad de gobierno local promueva la destitución, siempre y cuando el proceso tenga lugar después de un año de ocupación del cargo por parte del funcionario afectado, supuestamente para evitar "procedimientos fastidiosos".

En Bataán, 87 funcionarios, entre ellos, alcaldes, vicealcaldes, miembros de la junta provincial y consejeros (de un total de 114) emprendieron la maniobra el 2 de julio de 1993, formando una asamblea de destitución preparatoria para promover la celebración de unas elecciones provinciales especiales. El resultado de los comicios fue la victoria de Román sobre García, por un estrecho margen de 3 394 votos. A pesar de que tomó un año hacerla efectiva debido a los múltiples procedimientos legales dilatorios interpuestos por García, Román y sus partidarios han demostrado que la cláusula de destitución funciona, aunque García ha declarado que piensa volver a presentar su candidatura en mayo de 1995.

[12] *Ibid.*, 12 de septiembre de 1994.

En el ámbito de la salud, el código parece haber dejado insatisfechos a muchos electores de todo el país. Esto se refleja en el Proyecto Legislativo 11 855, el cual, tras advertir el deterioro de los servicios hospitalarios, pretende revertir de las unidades locales al Departamento de Salud (DOH), la propiedad, la administración y la supervisión de los hospitales provinciales, distritales, comunitarios y de Medicare. En ciertas áreas, algunos congresistas que realizaron visitas de inspección descubrieron que los medicamentos destinados a los hospitales eran almacenados en las oficinas o en las casas de los funcionarios locales y distribuidos sólo a sus partidarios.[13] El Departamento del Interior y de Gobierno Local y la Liga de Gobernadores se han opuesto tajantemente al proyecto de ley, basándose en que contraviene el espíritu de autonomía local. Aunque la ley ya fue aprobada por la Cámara Baja, el Senado sancionó en agosto una medida complementaria que suspende la devolución de los servicios médicos al DOH por un periodo de tres a cuatro años.

Iglesia contra Estado

Los miembros de la jerarquía de la Iglesia católica se habían ido encaminando durante meses hacia una confrontación directa con la administración de Ramos en el tema poblacional. Para mostrar la oposición eclesiástica a la política de planificación familiar del gobierno, que propugna hacer asequibles medios anticonceptivos naturales y artificiales. Hubo presentaciones en televisión, comentarios radiofónicos, sermones dominicales, desplegados periodísticos y artículos editados en diversas publicaciones periódicas, escritos por sacerdotes o laicos partidarios de la postura de la Iglesia. Los conservadores eclesiásticos afirman que la disponibilidad de anticonceptivos artificiales llevará a la inmoralidad, el aborto y la destrucción de la familia.

La política del gobierno de Ramos está a todas luces vinculada con su plan de desarrollo global, con el que espera reducir la tasa de crecimiento poblacional anual, de 2.3% en la actualidad, a 1.9% en 1998, mediante una amplia campaña de información sobre el uso de los anticonceptivos, entre otras medidas. Las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indican que sólo 40% de los filipinos han utilizado métodos de planificación familiar en el periodo 1975-1993, comparado con 74% en Singapur; 66% en Tailandia (país que cuenta con un intenso programa gubernamental de planificación familiar); 53% en Vietnam; 50% en Indonesia, y 48% en Malasia.[14] A estos índices se agrega que, según un estudio del Banco Mundial, la población de Filipinas es la tercera de más rápido crecimiento en toda Asia,[15] una situación que debe cambiar para que el país pueda alcanzar a otras economías en desarrollo de la región. Por este motivo, el secretario de Salud, Juan Flavier, el miembro más popular del gabinete de Ramos, se ha dedicado a defender la postura gubernamental con vigor, paciencia, claridad y sentido del humor.

El conflicto, sin embargo, llegó a su clímax en agosto, cuando el gobierno reveló su intención de apoyar el "Anteproyecto de Acción" que se propuso a los países participantes en la Tercera Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, de la ONU, que tuvo lugar en septiembre en El Cairo, Egipto. El Vaticano y los dirigentes locales de la Iglesia interpretan determinados pasajes del documento —por ejemplo, la referencia a la "maternidad segura"— como una aceptación del aborto como medio de control de la población. Aunque los funcionarios gubernamentales han expresado con insistencia que la Constitución prohíbe el aborto bajo toda circunstancia y que, por tanto "no es un método aceptable de planificación familiar", la Iglesia ha seguido acusando al gobierno de fomentar la promiscuidad, el aborto y la disolución de la familia filipina. El 14 de agosto, la Iglesia organizó en Manila una manifestación masiva y convocó a todos los católicos (85% de los filipinos pertenecen a esa religión) a acudir en apoyo de la postura eclesiástica. Con objeto de asegurarse una asistencia numerosa, los estrategas de la Iglesia eligieron como lema la leyenda "salvemos a nuestros hijos".

Percatándose de que el choque directo con la Iglesia sería una imprudencia política, Ramos atenuó el enfrentamiento pocos días antes de la manifestación ordenando a Flavier y a otros funcionarios gubernamentales que se abstuvieran de hacer declaraciones provocativas contra la Iglesia. También exhortó a los católicos filipinos para asistir a la asamblea (el propio Ramos es protestante). Para entonces resultaba evidente que la cruzada de la Iglesia no era un simple asunto local, sino parte de la campaña internacional del Vaticano para conformar una alianza antiaborto en El Cairo. La negativa del gobierno a izar la bandera del Vaticano fue irritante para la jerarquía eclesiástica, la cual opinaba

[13] *Ibid.*, 7 de junio de 1994.

[14] *Ibid.*, 14 de agosto de 1994.

[15] *Far Eastern Economic Review*, 18 de agosto de 1994.

que las naciones islámicas apoyaban más a aquel país que Filipinas, el único país predominantemente católico en Asia.

Demostrando perspicacia política, Ramos invitó al Comité Consultivo Ecuménico Nacional —integrado por representantes de la Iglesia católica, los musulmanes filipinos, la Iglesia ni Kristo, el Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas, la Iglesia Independiente Filipina y el Consejo Filipino de Iglesias Evangélicas— a efectuar consultas en Malacañang para determinar cuál debería ser la postura oficial de la delegación filipina en El Cairo. También sustituyó a algunos delegados con otros propuestos por la Iglesia católica. A la postre, no fue el pasaje sobre la maternidad segura el que primaron los representantes de Filipinas en la conferencia sobre población; en vez de ello, se dedicaron a cabildear para que el "derecho a la reunificación familiar" de los inmigrantes se incluyera en el apartado de la declaración final correspondiente a los derechos de los inmigrantes; pero fracasaron.

Reforma agraria: buenas noticias, malas noticias

Ernesto Garilao, secretario del Departamento de Reforma Agraria (DAR), ha estado trabajando discretamente para acelerar la adquisición y la distribución de tierras dentro del Programa Global de Reforma Agraria (CARP). El DAR se ha fijado la meta de redistribuir en 1994 un área total de 480 000 ha (80 000 más que en 1993). La cantidad, sin precedente, de tierras repartidas mediante el CARP tan sólo en el primer año de gobierno de Ramos equivale a 44% de las tierras asignadas en los seis años del gobierno de Aquino, y a casi 60% de las que se entregaron durante el régimen de Marcos. Esta notable diferencia, verificada bajo la dirección de Garilao, puede atribuirse a sus expeditas decisiones sobre casos agrarios pendientes, a la mejora de los paquetes de compensaciones para los terratenientes y a la capacitación del personal de campo del DAR y de las organizaciones campesinas involucradas.

Por otra parte, en lugar de dispersar los recursos del departamento para abarcar áreas extensas, Garilao ha concentrado las energías del DAR en las Comunidades de Reforma Agraria (CRA), es decir, áreas relativamente contiguas establecidas por el DAR que podrían permitir la aplicación de mejores estrategias de administración de la agricultura, como la programación de la producción y el arrendamiento de costosa maquinaria agrícola, con la colaboración de cooperativas de agricultores, de las ONG

favorables y de grupos eclesiásticos. En todo el país hay 253 comunidades de este tipo, de las que se espera que concierten acuerdos de cultivo por contrato con empresarios locales y extranjeros, actuando de esa manera como puntos focales de desarrollo rural. Las CRA de Bukidnon, por ejemplo, son parte de un complejo de producción y procesamiento de tomates, mientras que las de la provincia Isabela participan en un programa integrado de producción de maíz y ganado.

No obstante, los problemas de financiamiento asedian al CARP, el cual está sujeto a un plazo de aplicación de diez años que concluye en 1998. Aunque una proporción considerable del dinero empleado para la adquisición de tierras procede del Fideicomiso para la Privatización de Activos y de la Comisión Presidencial de Buen Gobierno, el DAR necesita más recursos para proporcionar servicios de apoyo a las CRA, y depende del financiamiento de instituciones extranjeras para obtener los 3 000 millones de pesos que se requerirán en 1995; además de 3 600 millones adicionales para 1996. En 1994 sólo se dedicó a la reforma agraria 2.3% de los 362 000 millones de pesos del presupuesto nacional, menos de un décimo de lo que se destinó al pago de la deuda.[16] El Fondo para la Reforma Agraria, que en el pasado financió el programa, dispone de unos 8 000 millones de pesos, pero una restricción impuesta por el Congreso prohíbe desembolsar más de 6 400 millones de pesos. Asimismo, es poco probable que un Congreso dominado por terratenientes se muestre generoso con el DAR. Se ha informado que por lo menos 116 representantes de la Cámara Baja poseen tierras agrícolas y que algunos tienen también intereses en empresas agrícolas, en tanto que al menos 20 de los que no son propietarios de tierras cultivables poseen negocios agrícolas.[17]

De hecho, la actual Ley de Reforma Agraria Global (CARL) corre el riesgo de mayor debilitamiento, ya que en la Cámara de Representantes hay alrededor de 20 proyectos de ley, pendientes de aprobación. A partir de 1992, el Instituto Campesino Filipino ha revisado diversos proyectos legislativos cuyo propósito es enmendar la ley de reforma agraria mediante exenciones, aplazamientos de su aplicación o modificaciones a las disposiciones de retención. Una de ellas, el Acta de Arrendamiento a Inversionistas (R.A. 7652) de 1993, permite a los inversionistas extranjeros arrendar tierras de particulares hasta por 75 años, lo que equivale a una propiedad vitalicia.

[16] *Philippine Daily Inquirer*, 11 de junio de 1994.
[17] *Ibid*.

En realidad, la CARL ya estaba plagada de argucias cuando el Congreso la aprobó, hace seis años. El resultado neto es que el área total exenta de distribución, o cuyo reparto ha sido aplazado, asciende a casi 500 000 ha de tierra agrícola de primera calidad. Además, 160 247 han escapado a la aplicación de la reforma agraria mediante su conversión a un uso industrial o residencial. No es de extrañar que, seis años después del establecimiento de la CARL, sólo 30% de los campesinos del país sean dueños de las tierras que cultivan.[18]

Otros problemas que obstruyen la aplicación de la CARL son los escándalos de sobrevaloración de la tierra, las interminables disputas sobre las indemnizaciones, los cambios en la burocracia del DAR y la desenfrenada conversión ilegal del uso de las tierras. Por si fuera poco, la Corte Suprema se ha inclinado a interpretar conservadoramente la legislación sobre la reforma agraria, pronunciándose cada vez más a menudo, en los juicios sobre conversión de tierras, en favor de los terratenientes que desean darles un uso residencial, industrial, comercial o turístico. Esto ha obrado contra los intereses de los arrendatarios y de los campesinos, supuestos beneficiarios de la CARL, mermando de ese modo la intención de justicia social del programa. Por lo demás, debido a las dificultades económicas generalizadas, algunos campesinos revenden las tierras recién adquiridas a sus antiguos propietarios o a quienesquiera que les ofrezcan dinero en efectivo. Esto ha ocurrido aun en la comunidad de reforma agraria modelo del DAR en Jala-Jala, provincia de Rizal.

Optimismo económico

El secretario de Finanzas, Roberto de Ocampo, expresó las espléndidas expectativas que alberga respecto a la economía filipina cuando la calificó de "cachorro de tigre", refiriéndose a las incipientes tendencias de crecimiento experimentadas en el primer trimestre del año, semejantes a las de las "economías tigre", de rápido desarrollo de la región. De Ocampo, quien se incorporó al gabinete el 1 de febrero, trabajó durante diez años como consultor del Banco Mundial en Washington, D. C., antes de volver al país en 1986 para ocupar la presidencia del Banco de Desarrollo de Filipinas. Su descripción parece adecuada, ya que la economía creció 5.4% en el segundo trimestre, debido principalmente al aumento

[18] *Idem.*

de la producción agrícola y al incremento de las remesas procedentes del extranjero. La NEDA informó que el producto nacional bruto (PNB) aumentó 5.1% en el primer semestre, más del doble que en el mismo periodo del año anterior, cuando creció 2.3 por ciento.

Los efectos positivos de la solución de la crisis energética, de las condiciones climáticas más favorables y del robustecido optimismo de los inversionistas se reflejaron en la economía. Por otra parte, los ingresos procedentes del exterior, compuestos mayoritariamente por los envíos de los trabajadores filipinos bajo contrato en el extranjero, ascendieron a 40 000 millones de pesos en los primeros seis meses, mientras que en el mismo lapso del año anterior fueron de 33 800 millones. El producto interno bruto (PIB) creció 4.5% en el segundo trimestre, en tanto que hace un año aumentó 2.6%. La agricultura, que sufrió un retroceso de 0.7% en el primer trimestre, se recuperó con un crecimiento de 5.2% en el periodo abril-junio. En el primer semestre, la expansión de la agricultura fue de 2.2 por ciento.

Las industrias, que aportaron 33% del PIB, declararon un crecimiento de 6.1% en la primera mitad de 1994, revirtiendo una disminución de 0.7% experimentada durante el mismo intervalo del año anterior. A diferencia del sector minero, que tuvo una caída productiva de 4.3%, los sectores manufacturero, de la construcción y de servicios públicos (electricidad, gas y agua) lograron avances sustanciales. Las manufacturas crecieron 5% en el primer semestre, contra 3.1% el año anterior; la construcción se incrementó 10%, contra 7.8% en 1993, y los servicios públicos registraron una expansión de 14.5% después de un retroceso de 0.1%. El comportamiento de la economía en la primera mitad del año, en general vigoroso, ha impulsado al Centro de Investigación y Comunicación, una institución de investigación privada, a pronosticar un crecimiento de 5.5% para todo 1994, muy superior al objetivo de 4.5% que se ha fijado el gobierno.[19]

El mercado de valores

Un claro indicador de la recuperación económica se encuentra en los activos mercados de capital, los cuales se vieron estimulados por el auge del mercado de valores generado en 1993 por los inversionistas extran-

[19] *Ibid.*, 1 de septiembre de 1994.

jeros y por la fusión, verificada el 4 de marzo e impulsada por Ramos, de las bolsas de valores de Manila y de Makati, ahora denominadas Bolsa de Valores Filipina (PSE). El nuevo presidente de ésta ha decidido introducir reformas y depurar las operaciones de la bolsa unificada. La presencia de agentes extranjeros afiliados, poseedores de avanzados procedimientos de investigación ha inducido, a su vez, la profesionalización de la industria del corretaje. Además, el éxito conseguido en 1993 por muchas compañías ha alentado a otras a procurar su inscripción en el mercado de valores este año. En 1993, 13 compañías recaudaron un total de 11 000 millones de pesos en ofertas públicas iniciales, y se espera que por lo menos 15 firmas obtengan 22 000 millones de pesos en 1994. Las corporaciones locales, muchas de ellas propiedad de familias individuales, han logrado recaudar cuantiosas sumas mediante el lanzamiento de bonos y se encuentran inmersas en grandes programas de expansión.[20]

Bienes raíces

El mercado de la propiedad también ha empezado a prosperar. Muchas compañías locales, incluidas algunas con escasa experiencia en el ramo, están canalizando sus ganancias hacia los bienes raíces. Los inversionistas extranjeros también participan. En la zona metropolitana de Manila, la construcción de *malls*, centros comerciales y oficinas de empresas está en auge. El número de compañías nacionales y extranjeras que buscan espacio para oficinas está teniendo un crecimiento anual aproximado de 16%.[21] Hace cinco años sólo había una firma de bienes raíces preponderante, inscrita en el mercado de valores; hoy en día hay 12. Los observadores señalan, sin embargo, que las nuevas zonas de negocios, especialmente en Alabang y Fuerte Bonifacio, podrían generar el desplome generalizado de los precios de las propiedades.

En 1992, el Acta de Conversión y Desarrollo de las Bases (R.A. 7227) estipuló la transformación y el desarrollo de Fuerte Bonifacio, el campo militar más grande de la zona metropolitana de Manila, en un centro mixto residencial, empresarial, comercial y recreativo. El gobierno también desea convertir la antigua Base Aérea Clark en un complejo industrial y turístico. La Corporación de Desarrollo de Clark ha recibido pro-

[20] *Far Eastern Economic Review*, 16 de junio de 1994.
[21] *Ibid.*, 22 de septiembre de 1994.

puestas de compañías locales y extranjeras para realizar seis grandes proyectos, lo que representará inversiones en la región de 1 900 millones de pesos durante los próximos dos años. Esto se añade a los siete acuerdos de arrendamiento de las propiedades de Clark ya firmados.

La antigua Base Naval de Subic, hoy un puerto libre, se está transformando poco a poco en un polo de crecimiento empresarial. La Autoridad Metropolitana de Subic ya ha aprobado 54 proyectos de inversión por un valor de 477 millones de dólares estadunidenses. Por ejemplo, Federal Express, el servicio norteamericano de carga y mensajería, planea instaurar un centro regional para sus operaciones en Asia, mientras que un consorcio de Taiwan establecerá una zona industrial en Subic.

Privatización de activos

En cumplimiento de su compromiso de promover las privatizaciones, el presidente Ramos aprobó en 1994 la venta de más compañías gubernamentales. Tan sólo en los tres primeros meses, el gobierno obtuvo alrededor de 1 300 millones de dólares, cerca de un tercio del total de 3 700 millones que ha recaudado desde la adopción de esta política, hace ocho años. De los 300 activos con que contaba inicialmente, el Fideicomiso de Privatización de Activos (APT) ya ha traspasado alrededor de 150, y se dispone a vender otros. Por ley, las operaciones del APT terminarán en junio de 1995, por lo que el organismo se está apresurando a completar la tarea. El gran volumen de ventas en la primera parte del año se debe a los traspasos de la Manila Electric Company, la Oriental Petroleum and Minerals Corporation, la Paper Industries Corporation of the Philippines, la Philippine Shipyard Corporation, la National Shipping Company y la Petron Corporation. Otros activos en venta son la Food Terminal Incorporated, la Philippine Associated Smelting and Refining Corporation, la Philippine National Construction Corporation, la Philippine National Railways y el Manila Hotel.

En diciembre de 1993, la Saudi Arabia Oil Company adquirió 40% de la Petron Corporation, la mayor refinería petrolera del país. Esta venta redujo a 40% la parte de la Petron controlada por la Philippine National Oil Corporation (PNOC), de propiedad gubernamental, poniendo de ese modo a la refinería fuera del alcance de las normas que rigen a las compañías públicas. En julio, cuando el gobierno vendió otro 20% de las acciones de la Petron, la oferta pública inicial (OPI) de 1 000 millones de

acciones fue la más grande de todos los tiempos en Manila. La cuota de 600 millones de acciones reservada a los filipinos tuvo una sobresuscripción de cerca de 60%, en tanto que la cuota internacional recibió tres veces más licitaciones de las esperadas. Para atender a los suscriptores nacionales, la Petron se vio obligada a reducir la asignación de acciones por persona de 5 000 a 1 600. En medio de acusaciones de corrupción y favoritismo, los ejecutivos de la Petron también tuvieron que ceder a la presión pública y renunciaron a una porción de los 100 millones de acciones que tenían adjudicadas. Con todo, la amplia dispersión de las acciones de la PNOC parecía calculada para minimizar el riesgo de protestas públicas, ya que el país se encamina a la desregulación de los precios del petróleo, en parte, mediante la creación de elementos interesados en el incremento de los precios del crudo.

Fin del proteccionismo en las telecomunicaciones

A principios de 1993, la administración de Ramos desreguló la industria de las telecomunicaciones y ordenó la interconexión entre las redes de telecomunicación. Esto forzó a la Philippine Long Distance Telephone Company (PLDT) a interconectarse con otras empresas telefónicas y a emprender un programa masivo de "reserva cero" para proveer 950 258 líneas nuevas en 1996. La PLDT actuaba antes con tanta parsimonia o cobraba tarifas de interconexión tan elevadas en la zona metropolitana de Manila que los sistemas montados por nuevas empresas no resultaban comercialmente viables. Con la política actual, nueve compañías —casi todas vinculadas con grandes firmas extranjeras de telecomunicaciones— han ingresado en la industria, liquidando el antiguo monopolio virtual de la PLDT. Tan sólo en un año, Filipinas se ha convertido en un promisorio mercado para los proveedores mundiales de equipos de telecomunicación. La inversión en este rubro se duplicó en 1993 y creció 52% en el primer trimestre de 1994.

Por su parte, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (NTC), una institución reguladora, estipuló que las compañías que ingresen en el campo de las operaciones de telefonía celular y de enlace internacional (el sector lucrativo de la industria) deben instalar líneas telefónicas básicas, las cuales podrían llegar a proporcionar 3.5 millones de líneas para 1999. El presidente de la NTC, Simeon Kintanar, pronostica que "en cinco años, 80% de los filipinos tendrán cobertura telefónica".

Impuesto al petróleo

Con objeto de reforzar las finanzas gubernamentales, el presidente Ramos impuso, en septiembre de 1993, un impuesto promedio de 1.00 peso filipino (0.04 de dólar estadunidense) por litro de producto petrolífero. Para neutralizar las protestas contra el nuevo gravamen, Ramos ordenó al Departamento de Energía, autorizar a las compañías petroleras el cobro del impuesto al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (OPSF), un mecanismo de previsión financiera que en agosto de ese año disponía de un superávit de 4 000 millones de pesos. En consecuencia, pese al impuesto adicional, no se produjo un incremento del precio al menudeo. Pero en diciembre de 1993, cuando el OPSF se agotó y presentó un déficit de 1 500 millones de pesos, la Junta Reguladora de la Energía no tuvo más remedio que permitir, a fines de enero, que las compañías petroleras comenzaran a cobrar el impuesto de un peso en las gasolineras. El incremento de los precios fue considerable: 16% en la gasolina extra, y de 22 a 28% en productos petrolíferos de consumo tan masivo como el diesel, el queroseno y el gas licuado. Además, el efecto inflacionario fue enorme, ya que la tendencia de los comerciantes de aprovechar los aumentos autorizados por el gobierno y elevar los precios indiscriminadamente fue más allá de la compensación de sus costos.

El incremento de los precios del petróleo propinó el primer golpe importante a la popularidad de Ramos desde su asunción del cargo, en 1992. El 1 de febrero explotaron unas bombas en las oficinas de las empresas líder, Petron, Caltex Philippines y Pilipinas Shell. Ramos afrontó la amenaza de manifestaciones en todo el país y de huelgas generales promovidas por una coalición heterogénea denominada Kilusang Rollback, integrada por la Confederación de Sindicatos de Filipinas (la mayor agrupación laboral del país), organizaciones de izquierda, grupos eclesiásticos, la Rebolusyonaryong Alyansang Makabansa (Alianza Nacionalista Revolucionaria) y otras agrupaciones. El 23 de febrero, en lo que fue el primer desistimiento de su política, Ramos revocó el impuesto sobre el petróleo, aduciendo que se habían ideado otras medidas para incrementar las recaudaciones gubernamentales y que el Congreso se había comprometido a aprobarlas.

El gobierno había malinterpretado la situación. El público no podía tolerar un alza de los precios internos en un periodo de descenso mundial de los precios del petróleo y de fortalecimiento de la tasa de cambio del peso. El riesgo de estallidos de violencia en las manifestaciones anuncia-

das, habría eliminado la percepción internacional de mayor estabilidad política en el país. Con todo, el gobierno tenía que atenerse a su previsión de que el déficit presupuestario se mantendría en 26 000 millones de pesos, lo cual estaba contemplado en el programa económico comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Nuevas leyes fiscales

El Congreso aprobó varias leyes fiscales en mayo, allanando el camino para que el gobierno pudiera acceder a un crédito de 684 millones de dólares concedido por el FMI (y esperado desde 1992), lo que a su vez permitió la reprogramación de los préstamos vencidos del denominado Club de París, adeudados por gobiernos extranjeros. En agosto, los acuerdos con el FMI y el Club de París dieron pie a una asistencia oficial para el desarrollo en Filipinas por valor de 5 600 millones de dólares, con una aportación japonesa de 1 500 millones de dólares que convertía a Japón en el principal donante.[22]

Las nuevas medidas fiscales pretenden: *1*) liberalizar las normas que rigen los planes de "construcción-operación-transferencia" para el financiamiento de proyectos de infraestructura; *2*) abrir el sistema bancario nacional (protegido desde 1948) para permitir el acceso de hasta 10 bancos extranjeros, lo cual imbuirá mayor competencia en la industria y, a la postre, reducirá las tasas de interés; *3*) incrementar los impuestos a las transacciones del mercado de valores de 0.25% a 0.5%, y *4*) ampliar el sistema del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para incluir los sectores de servicios y de la propiedad. Se espera que los dos últimos aporten anualmente 9 000 millones de pesos (340 000 millones de dólares estadunidenses) en ingresos adicionales indispensables para superar el déficit presupuestario, que constituye el problema económico más grave del país.

La ley de ampliación del sistema del IVA fue polémica desde el principio. Según ciertos informes, Ramos tuvo que seducir al Congreso con incentivos financieros para que aprobara el proyecto de ley.[23] Tras la aprobación, determinadas previsiones fueron criticadas públicamente y algunos legisladores admitieron con embarazo que las desconocían. La

[22] *Ibid.*, 14 de agosto de 1994.
[23] *Ibid.*, 12 de mayo de 1994.

ley, que sustituyó al impuesto al petróleo, cancelado por Ramos en febrero, era una precondición para recibir el préstamo concedido en agosto por el FMI. Aunque el gobierno insistió en que sólo remplazaba viejos impuestos, la nueva ley del IVA —en parte debido a que comprendía los servicios de transporte— en realidad incrementaría el precio de los bienes básicos y de los servicios. Por lo tanto, se generó una intensa ola de protestas públicas, nutrida por la percepción generalizada de que imperaba un despilfarro y una corrupción gubernamental descontrolados. La admisión de los legisladores de que desconocían determinadas previsiones de la ley puede atribuirse a intereses políticos creados: con las elecciones programadas para mayo, pocos deseaban provocar la ira de los votantes y les parecía más seguro mostrar ignorancia que complicidad.

Los esfuerzos de Ramos para mitigar la oposición popular al IVA mediante la concesión de exenciones por orden ejecutiva —por ejemplo, a los actores, las empresas financieras, los agronegocios, la circulación de periódicos y las ventas de libros de texto—, sólo consiguió fortalecer las acusaciones de que se extralimitaba en sus atribuciones: que era vulnerable a grupos de presión influyentes y que la ley estaba viciada. El 30 de junio, la Corte Suprema bloqueó la aplicación de la legislación, justo antes de la fecha en que debía entrar en vigor, el 1 de julio, con objeto de dictaminar en nueve demandas presentadas sobre la base de que la ley o la forma en que se había aprobado violaban la Constitución. El 25 de agosto, tras una serie de votaciones que llevaron a un punto muerto, la Corte Suprema se pronunció en favor de la constitucionalidad de la ley de ampliación del IVA, la cual surtió efecto el 1 de octubre.

Presupuesto nacional

Resulta incierto dónde piensa conseguir el gobierno los fondos que necesita para sostener todos sus programas al tiempo que reduce el déficit presupuestal, como tiene planeado, de 2.9% del PNB en 1993 a 2.1% en 1994 y a 1% en 1995. Dada la inminencia de las elecciones de 1995, es probable que el gobierno se embarque en un festival de gastos con el propósito de aumentar la popularidad del partido en el poder. El presupuesto para 1995 presentado por la administración de Ramos asciende a 384 700 millones de pesos, una suma sólo 6.4% superior al presupuesto de 1994, de 362 000 millones, y apenas suficiente para cubrir la tasa de inflación prevista para 1995, de 6.5%. Debido a lo mucho que el gobierno debió

gastar para reparar la infraestructura dañada por las catástrofes naturales de principios de los noventa y, luego, para resolver la crisis energética el año pasado, poco se ha hecho para "cebar" la economía. Entre las medidas propuestas para reducir los gastos están: el adelgazamiento de la burocracia por medio de la supresión de dependencias redundantes y de la devolución de funciones y responsabilidades a los gobiernos locales: además la limitación de los desembolsos de capital, pese a la necesidad de mejorar la deteriorada infraestructura. Aunque todavía representa el mayor rubro individual, al pago de la deuda externa sólo se le ha asignado 28.7% del presupuesto de 1995, en contraste con 40%, aproximadamente, que se le destinó en el gobierno de Aquino. Entre los ministerios, el de Educación recibirá la mayor partida, 46 500 millones de pesos, seguido por el de Defensa con 24 900 millones y el de Obras Públicas y Carreteras con 2 130 millones.

Otros problemas

La economía está amenazada por otros problemas estructurales. Se espera que el déficit comercial, que en el primer semestre de 1994 se elevó a 4 070 millones de dólares frente a 2 860 millones en el mismo lapso del año anterior, alcance los 7 800 millones de dólares a fines de año. Los ingresos totales por exportaciones se calculan en 13 600 millones de dólares.[24] Los observadores temen que esta situación desemboque en una crisis total de la balanza de pagos, en especial porque 15% de las importaciones son bienes de consumo, no de capital. Esto sólo puede empeorar a medida que la liberalización comercial vaya afianzándose.

La fortaleza de la moneda está agravando el déficit comercial. La tasa de cambio alcanzó un nivel de 25.60 pesos por dólar a mediados de año, pero en septiembre se situó en 26.30. La solidez de la moneda puede atribuirse a la poderosa influencia de las remesas enviadas por los filipinos emigrados y a las altas tasas de interés. Si bien es cierto que la apreciación del peso puede ser benéfica para el país en la compra de petróleo y en el pago de la deuda, daña al sector exportador, precisamente el segmento que Ramos ha elegido para inducir un crecimiento económico y mayor. Sin embargo, en la primera mitad de 1994 la inflación anual quedó un poco por debajo de 10%, contribuyendo así al descenso de las tasas de interés.

[24] *Philippine Star*, 29 de septiembre de 1994.

La recaudación tributaria también es un problema mayúsculo, pero el gobierno de Ramos está intentando solucionarlo en forma sistemática. El pago de impuestos en Filipinas es considerado el más bajo de Asia, pues sólo aporta 14% del PNB. La Oficina de Ingreso Interno (BIR) informa que cada año se pierden cerca de 60 000 millones de pesos a causa de la evasión fiscal. El gobierno está instrumentando una estrategia con tres vertientes: perfeccionamiento de la recaudación, ampliación de la base de contribuyentes y reforma del sistema de impuestos y tarifas, así como de las dependencias recaudadoras. La BIR también se está restructurando: el número de distritos de recaudación ha pasado de 80 a 115. Además, para disminuir la corrupción, los funcionarios de bajo rango han sido despojados del poder discrecional para llegar a componendas fiscales, el cual es ahora atribución exclusiva de los cinco funcionarios principales de la BIR.

Tras lanzar una campaña contra los evasores, la BIR reportó un incremento sustancial de las recaudaciones procedentes de contribuyentes individuales y corporativos. En los primeros cuatro meses de 1994, los impuestos pagados por particulares ascendieron a 12 888 millones de pesos, una suma 44.59% superior a los 8 910 millones obtenidos en 1993. Los impuestos sobre la renta pagados por las corporaciones crecieron 40.11%, para elevarse a 17 040 millones de pesos, contra 12 160 millones en 1993.[25] En septiembre, el equipo de especialistas dirigido por el secretario de Finanzas envió un nuevo paquete de reformas fiscales al presidente Ramos y a los líderes del Congreso.

Sus propuestas pretenden fijar en 30% de los ingresos el impuesto sobre la renta de los individuos y, al mismo tiempo, reducir a tres las nueve categorías de impuesto sobre la renta vigentes en la actualidad. Mientras que el propósito inmediato de estas reformas es compensar la ampliación del IVA, su objetivo general parece obtener no sólo ingresos adicionales, sino también corregir la estructura regresiva del sistema fiscal.

GATT

Filipinas es uno de los 111 países que el 15 de abril firmaron, en Marruecos, el Acta Final de la Ronda Uruguay, dando fe de su intención de unirse al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). Sin embargo, el Senado debe ratificar el acuerdo con una votación de dos ter-

[25] *Philippine Daily Inquirer*, 13 de junio de 1994.

cios de sus miembros para que Filipinas pueda ingresar en la Organización de Comercio Mundial (WTO). Si el Senado se niega a ratificar el GATT, el país será excluido del círculo en el que se intercambian 90% de los bienes del mundo. Pero si lo aprueba, Filipinas se verá lanzada, sin la preparación necesaria, a una arena sumamente competitiva.

En opinión de la crítica, los sectores industrial y agrícola del país son débiles y poco competitivos en relación con sus pares extranjeros. Esto obedece a la fortaleza del peso, a las elevadas tasas de interés y de inflación, al alto costo de la energía, a los excesivos aranceles que gravan las materias primas y los equipos importados, a la inadecuada infraestructura y a la baja productividad de la fuerza de trabajo, unida a los incrementos salariales obligatorios. La industria del vestido, por ejemplo, carece de suficientes plantas textiles locales, mientras que la electrónica sufre escasez de técnicos debida a la fuga de cerebros. Las industrias de la pesca y enlatado se ven perjudicadas por la incompetencia de las agencias gubernamentales responsables de la aplicación de estándares de calidad, y los fabricantes de alimentos están asediados por la carencia de los servicios de apoyo y de la información técnica, así como del alto costo de materias primas como el azúcar.

El sector agrícola, que según los vaticinios será el más afectado, padece el alto costo del transporte, la falta de créditos, irrigación, drenaje e instalaciones de almacenaje de las cosechas, la ausencia de caminos entre las granjas y los mercados, y la falta de servicios de investigación y desarrollo. Los cultivos de arroz y maíz, las producciones azucarera y la crianza de aves, ganado y cerdos, serán amenazados por productos de importación más baratos. Aún así, cierto número de asociaciones agrícolas se han unido a 17 grupos del sector industrial para demandar al Senado la ratificación del GATT. Parece haber consenso en que Filipinas se arriesga a perder más si decide permanecer fuera de la WTO. Ramos está ejerciendo intensa presión para que el acuerdo sea ratificado, en tanto que algunos legisladores y funcionarios escépticos piden la adopción de medidas que hagan las veces de "red de seguridad" para amortiguar el impacto en los sectores que resultarán perjudicados.

La paz y el orden

El 25 de marzo, el presidente Ramos firmó dos bandos de amnistía que autorizaban la rendición y la reinserción en la sociedad de los rebeldes

que se registraran en el plazo de seis meses (ampliado hasta el 30 de noviembre), salvo en el caso de aquellos que tuvieran antecedentes penales. Entre los primeros que aprovecharon la amnistía había miembros de la Rebolusyonaryong Alyansang Makabansa (RAM), la organización militar rebelde que efectuó varias intentonas golpistas contra el gobierno de Corazón Aquino. Anteriormente conocida como Movimiento para la Reforma de las Fuerzas Armadas, en Filipinas la RAM es considerada desde hace mucho tiempo una fuerza agotada, pero todavía sigue causando cierto desasosiego al gobierno debido a la negativa de sus miembros a entregar las armas de alto poder que tienen ocultas. Con todo, el peligro que representa está disminuyendo con el advenimiento de las elecciones congresuales y locales de mayo de 1995, en las que algunos líderes de la RAM han insinuado que contenderán.

Conversaciones de paz con los rebeldes comunistas

Después de una suspensión de casi un año, las conversaciones de paz entre el gobierno y el Frente Nacional Democrático (NDF) se han reanudado. En una serie de reuniones celebradas en Breukelen, Holanda, entre el 10 y el 14 de junio, el embajador Howard Dee, representante del gobierno, y Luis Jalandoni, representante de la comisión de los rebeldes comunistas, se encontraron cara a cara por vez primera para firmar una declaración conjunta de diez puntos. Algunas conversaciones exploratorias anteriores se habían estancado en cierto número de temas.

El resultado de las reuniones de junio fue un acuerdo para sostener una nueva ronda de pláticas en el primer trimestre de 1994 en la región del Benelux, con el fin de ultimar el programa de trabajo de comisiones mutuas, lo cual podría conducir a negociaciones formales. Las cuatro comisiones acordadas tratarán acerca de los derechos humanos, las reformas socioeconómicas, las reformas políticas y constitucionales, y el cese al fuego y la ubicación de las fuerzas beligerantes.

No obstante, las pugnas en el seno del Partido Comunista de Filipinas (CPP), iniciadas en 1993, se han profundizado y han contagiado al NDF y a algunos sindicatos y grupos estudiantiles de izquierda, dividiendo enconadamente a quienes "reafirman" la línea ideológica y el liderazgo del fundador del CPP, José María Sison, y aquellos que los "rechazan". Los "reafirmadores" apoyan a Sison y a su idea de que el CPP debe continuar con la estrategia maoísta de una guerra campesina prolongada, y

los "rechazadores" sostienen que la mayor parte de la fuerza de trabajo campesina se ha ido a las ciudades y a los pueblos, por lo que debe ponerse énfasis en las insurrecciones y los movimientos de masas urbanos. El conflicto ha derivado en acusaciones personales, mientras el partido busca chivos expiatorios para explicar su decadencia. A este declive se suman los arrestos, la rendición y el asesinato de muchos de sus líderes, ocurridos durante el último año. Los observadores temen que la lucha interna empeore y desemboque en un baño de sangre devastador. La escisión del partido también podría complicar las conversaciones de paz entre el gobierno y el NDF debido a que, incluso si se llegara a un acuerdo con la facción de Sison, sería poco significativo si no es aceptado por los "rechazadores".

Negociaciones con los rebeldes musulmanes

El 20 de diciembre de 1993, el gobierno y el Frente Moro de Liberación Nacional (MNLF), sostuvieron por vez primera conversaciones de paz en suelo filipino, en el pueblo de Patikul, provincia de Sulú. El resultado fue la firma, el 26 de enero, de un acuerdo de cese al fuego por el embajador Manuel Yan, jefe del equipo negociador gubernamental, y el presidente del MNLF, Nur Misuari, radicado en Arabia Saudita, quien llegó al país por vía marítima en diciembre de 1993, procedente de Malasia, y partió cinco meses más tarde. Las conversaciones formales, auspiciadas por el gobierno de Indonesia, se reiniciaron en septiembre en Jakarta. Se han establecido varios comités de trabajo y se ha dado comienzo a las discusiones sobre el programa gubernamental de amnistía para los rebeldes del MNLF y sobre el plan de desarrollo económico para Mindanao. También se convino el despliegue de funcionarios militares de los países miembros de la Organización de la Conferencia Islámica para que observen y supervisen los progresos del acuerdo de cese al fuego. Manuel Yan ha declarado que el principal objetivo del gobierno filipino es "llegar a un arreglo con los países islámicos para dar una solución global al problema de los musulmanes de Mindanao, conforme al Acuerdo de Trípoli de 1976".[26]

Entre tanto, la flamante Región Autónoma del Mindanao Musulmán (ARMM), creada en 1989 por medio de un plebiscito e integrada por cuatro provincias predominantemente musulmanas (Lanao del Sur, Maguindanao, Sulú y Tawi-Tawi), está recibiendo estímulos. Ramos ordenó a las brigadas de ingenieros del ejército la construcción de un camino de concreto, de 45 km, para unir las provincias de Cotabato y Lanao. Los críticos afirman, sin embargo, que esto se hizo sobre todo con vistas a las elecciones de 1995. En julio afloraron nuevas sospechas de manipulación política cuando el presidente de la Cámara Alta, José de Venecia, hizo pública la propuesta de un programa de desarrollo para el Mindanao Musulmán por valor de 25 000 millones de pesos. De acuerdo con el plan, 20% del dinero procedería de fondos asignados al Congreso y el 80% restante se solicitaría a naciones islámicas en forma de préstamos respaldados por obligaciones accionarias y derechos a concesiones especiales. De Venecia procuró subrayar que "el Mindanao Musulmán ya no es el patio trasero del país, sino la puerta de acceso a la civilización de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA)".[27]

Al igual que el CPP, el MNLF se afana por mantener la unidad en sus filas. Cuando firmó el acuerdo de 1976 con el gobierno, el MNLF negociaba desde una posición de fuerza unitaria. A partir de entonces, se ha fragmentado básicamente en tres facciones: el MNLF predominante en Tausug y dirigido por Nur Misuari; el Frente de Liberación Moro Islámico (MILF), más pequeño y predominante en Maguindanao, y el disidente Grupo Reformista-MNLF, predominante en Maranao. Se dice que el MILF desea ser incluido en las conversaciones de paz, y crea dificultades cada vez que el gobierno y el MNLF se disponen a negociar.[28] Así, por ejemplo, los rebeldes del MILF atacaron en agosto a un destacamento del ejército en una remota zona de Cotabato del Norte y luego tomaron como rehenes a siete ingenieros sudcoreanos que trabajaban en un proyecto de irrigación financiado por el Banco de Desarrollo Asiático. Los rebeldes utilizaron a los cautivos como escudos humanos para detener una ofensiva de las tropas gubernamentales, pero luego los liberaron gracias a la mediación del MNLF.

En junio, otro grupo musulmán rebelde denominado Abu Sayyaf (Portadores de la Espada) secuestró en Basilán a 74 personas, casi todas cristianas, en venganza por un ataque lanzado por el ejército contra sus correligionarios en la isla Joló. Quince rehenes fueron asesinados, uno escapó y 57 fueron liberados más tarde en dos grupos. Los rebeldes retuvieron al párroco Cirilo Nacorda, durante dos meses; su liberación ulterior

[26] *Ibid.*, 3 de septiembre de 1994.

[27] *Manila Chronicle*, 19 de julio de 1994.

[28] *Philippine Star*, 7 de septiembre de 1994.

también fue facilitada por el MNLF. En los dos últimos años, numerosos secuestros y atentados con bombas han sido atribuidos al Abu Sayyaf, un pequeño y oscuro grupo musulmán extremista que ha llegado a parecer más grande de lo que es en realidad, gracias a la exageración del ejército y de los medios de comunicación. Con todo, la aprehensión de los rebeldes llevó semanas a los militares, pese al despliegue de más de 1 000 soldados en Basilán. Los observadores advierten que las armas y el dinero del gobierno posiblemente no consigan eliminar el fanatismo y el terrorismo de grupúsculos como Abu Sayyaf, pero que un acuerdo con el MNLF quizá lo lograría.[29]

Ola criminal

A mediados de año, la criminalidad también repuntó en la zona metropolitana de Manila. En determinado momento llegaron a producirse dos o tres asaltos bancarios semanales. En junio y julio, 14 personas fueron secuestradas para pedir rescate. En el pasado, los extranjeros y los acaudalados de la etnia china solían ser el blanco de los secuestros, pero también los filipinos ricos, entre ellos un próspero industrial y dos hijos de un miembro del Congreso, han sido victimados. Esto ha hecho que los cínicos llamen a estos delitos "una industria en crecimiento". Dado que los crímenes son atribuidos con frecuencia a los soldados y a los policías despedidos, la depuración de las fuerzas armadas, la estricta confiscación de las armas no registradas y el embate contra el crimen organizado, se han convertido en un clamor generalizado.

La designación, en julio, de Recaredo Sarmiento III como nuevo jefe de la Policía Nacional Filipina (PNP), y en abril, la del teniente general Arturo Enrile como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Filipinas (APF), quizá no conduzca a la supresión inmediata de estos delitos, pero sin lugar a dudas lleva sangre nueva a esos cargos. Sarmiento, antiguo director del Comando Regional de la Capital, se hizo cargo de la PNP después de que las fuerzas armadas traspasaron las funciones contrainsurgentes a la policía. Por mandato legal, las APF han delegado sus operaciones en 32 provincias. En las 40 provincias restantes, la cesión está prevista para finales del año. No obstante, en el Senado hay un proyecto legislativo que otorga a las APF el papel preponderante en las actividades contrainsurgentes, en tanto que a la PNP le asigna una función de apoyo en virtud de que difícilmente podría afrontar el problema de la boyante criminalidad e insurgencia al tiempo que se somete a una reforma interna imprescindible.

[29] *Philippine Daily Inquirer*, 24 de julio de 1994.

Arturo Enrile se hizo cargo de unas APF menos díscolas. La amenaza de golpes de Estado ha desaparecido y las relaciones entre los militares y la autoridad civil —aunque encabezada por Ramos, un antiguo militar— están mejor definidas. Además, Enrile goza de respeto en el seno de las fuerzas armadas. En un tiempo fue superintendente de la Academia Militar Filipina, después jefe del ejército, donde desempeñó un papel fundamental en las negociaciones para poner fin al golpe de 1989. Se espera que Enrile concentre ahora la atención y la energía de las APF en el desarrollo nacional y que aplique los escasos recursos con que cuenta a la construcción de un aparato militar moderno y eficiente.

Relaciones exteriores

A pesar de que el presidente Ramos ha sido criticado por sus viajes al extranjero relativamente frecuentes (a fines de 1994 habrán sido 12, o alrededor de uno cada dos meses y medio desde que ocupó el cargo), la mayoría de los observadores admiten que ha logrado despertar el interés de los inversionistas extranjeros. El secretario de Industria y Comercio, Rizalino Navarro, informó que de los proyectos acordados en los viajes de Ramos para el 15 de marzo, se habían completado empresas conjuntas por un valor de 15 300 millones de pesos, y otros convenios con un valor de 93 500 se encontraban en diversas fases de desarrollo.[30]

Polígono de Crecimiento de la ANSEA del Este (EAGA)

Ramos aprovechó su segundo viaje a Brunei, efectuado en agosto, para asistir al décimo aniversario de la independencia de ese país y para hablar con el sultán acerca del desequilibrio comercial de 48.4 millones de dólares favorable a Brunei (atribuible sobre todo a las compras de petróleo); así como sobre el fomento del Polígono, cuyo propósito es la cooperación económica entre Palawan y Mindanao, en el sur de Filipinas; Brunei; Sabah, Sarawak y Labuán, en Malasia Oriental, y Kalimantan, Halmahe-

[30] *Far Eastern Economic Review*, 16 de junio de 1994.

ra y Célebes del Norte y del Sur, en Indonesia Oriental. El EAGA reviste un gran interés para Brunei. Con su enorme superávit de capital, ese país desea mostrarse particularmente activo en los proyectos regionales de telecomunicaciones y de turismo ecológico. En marzo, Brunei adquirió dos flamantes aviones Fokker 50 para usarlos en una ruta regular que cubre las principales ciudades de la región. La visita de Ramos dio pie para un acuerdo por instituir vuelos directos en la ruta Brunei-Puerto Princesa-Zamboanga-Davao-General Santos. Los consejos de turismo de Mindanao y Brunei también firmaron un acuerdo de relaciones bilaterales. Además, el Instituto Asiático de Administración, de la zona metropolitana de Manila, y la Universidad de Brunei Darrusalam establecieron intercambios académicos, en tanto que las Cámaras de Industria y Comercio de ambas naciones planean instaurar consejos de negocios para acometer empresas conjuntas. Durante el viaje, Ramos también se reunió con algunos de los 18 000 filipinos que viven en Brunei y que forman parte de la fuerza laboral de ese país, compuesta por 106 000 trabajadores.

Desde el lanzamiento del EAGA, realizado por Ramos en enero de 1993, el comercio y las inversiones trasfronterizos de la región han aumentado de modo notable. El número de enlatadoras de atún casi se ha duplicado en Mindanao; el atún se ha convertido en el segundo producto de exportación de la isla, después de la piña. Las empresas conjuntas entre filipinos e indonesios en la industria de la pesca y enlatado, han experimentado un crecimiento notable en el sur de Mindanao y Célebes del Norte. También poseen empresas conjuntas en los ramos del procesamiento de aceite de soya y de la reparación de barcos. Una compañía indonesio-filipina está creando una red de plantas de almacenamiento frigorífico para atender a los barcos pesqueros en el mar de Célebes. Asimismo, el comercio de materiales de construcción (por ejemplo, de cemento de Mindanao hacia Célebes del Norte) ha registrado gran incremento. Los vínculos comerciales son tan intensos que las Boraq Airlines de Indonesia vuelan ahora dos veces a la semana entre Ciudad Davao, en Mindanao, y Manado, la capital de Célebes del Norte.

Conferencia sobre Timor Oriental

Las relaciones amistosas entre Filipinas e Indonesia han sido fundamentales para el reciente crecimiento económico de Mindanao. Aunque en 1993 se produjo un desequilibrio comercial de 293 millones de dólares

favorable a Indonesia, el fortalecimiento de las relaciones comerciales ofrece la oportunidad de una mejoría de la balanza. Sin embargo, la celebración en Manila de la "Conferencia Asia-Pacífico sobre Timor Oriental" (APCET), puso en serio peligro la relación bilateral. Pese a que la APCET fue patrocinada por particulares, Indonesia criticó a Filipinas por albergar en Manila una conferencia sobre la antigua colonia portuguesa invadida y anexada por los indonesios en 1975. Cuando el gobierno filipino no adoptó medidas para cancelar la conferencia, Indonesia decidió ejercer presión. En las postrimerías de mayo, Jakarta pospuso la segunda ronda de las conversaciones de paz entre los musulmanes filipinos rebeldes y el gobierno de Filipinas que tenían lugar en su territorio. También retiró a sus representantes en la convención de negocios del EAGA que se celebraría en la ciudad de Davao. Por añadidura, el gobierno indonesio puso en suspenso nueve de los 12 convenios de empresas conjuntas acordados con los filipinos, por un valor de 300 millones de dólares, y detuvo a 25 barcos pesqueros de este país acusándolos de pesca furtiva en aguas indonesias.

Alarmado por el rigor de la reacción de Indonesia, Ramos recurrió a poderes ejecutivos especiales reservados a situaciones que afectan "la seguridad nacional y los intereses vitales de la nación" para prohibir la participación de extranjeros en la APCET, una cesión a las presiones de Jakarta que empañó su imagen. La Corte Suprema intervino en un asunto que estaba dando paso a una crisis internacional y expidió una orden de último momento que autorizaba la celebración de la conferencia (anulando de esta manera el dictamen de un tribunal inferior), pero mantuvo la prerrogativa de Ramos de excluir a los extranjeros. Aunque las relaciones bilaterales entre los dos países se han normalizado desde entonces, la actitud de independencia de Ramos se ha menoscabado y la reputación de prepotencia de Indonesia se ha confirmado. Dado que el EAGA es promovido principalmente por gobiernos y no por el sector privado, el caso de la APCET demuestra la vulnerabilidad del frente a las presiones políticas.

Quizá como un gesto político de aprobación a Ramos y de reproche a Suharto por su política hacia Timor Oriental, el presidente estadunidense, Bill Clinton, programó para noviembre una visita de dos días a Manila antes de viajar a Indonesia con objeto de asistir en Bogor a la reunión cumbre de la Conferencia Económica Asia-Pacífico (APEC). Ramos había invitado previamente a Clinton a acudir en octubre al cincuentenario del desembarco en Leyte de las Fuerzas Aliadas comandadas por el ge-

neral Douglas MacArthur, del mismo modo que había asistido en Europa a la celebración del Día-D. Sin embargo, por sus compromisos electorales en Estados Unidos, Clinton declinó la invitación y decidió, en cambio, hacer una escala en Filipinas en su camino hacia Indonesia.

Comunidad del Sudeste Asiático

A fines de mayo, funcionarios gubernamentales, analistas políticos y académicos de los seis países miembros de la ANSEA se reunieron en Manila con sus pares de Vietnam, Laos, Camboya y Birmania para redactar un manifiesto de intenciones para la formación de una Comunidad del Sudeste Asiático. El documento declaraba que el objetivo general de la comunidad era "ser una importante entidad política, económica, cultural y moral en el escenario mundial del siglo XXI".[31] Sus integrantes colaborarían para encarar problemas como el tráfico de drogas, el terrorismo, la migración laboral, la piratería y la prevención del sida. Se pretende que la comunidad otorgue a la ANSEA mayor influencia en el comercio, los derechos humanos, la APEC y el medio ambiente, entre otros asuntos. En efecto, este organismo serviría como ensayo para instaurar una ANSEA más grande.

La idea de crear una Comunidad del Sudeste Asiático fue rechazada por el ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, quien la calificó de "organización paralela al Foro Regional Asiático" (ARF), durante la reunión del ARF celebrada en julio en Bangkok. Establecido por la ANSEA para ocuparse de la seguridad y la cooperación regionales en la era posterior a la guerra fría, el ARF consta de seis miembros de la ANSEA, más sus socios comerciales: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Corea del Sur, Japón y la Unión Europea. Representantes de China, Laos, Papúa, Nueva Guinea, Rusia y Vietnam fueron invitados oficialmente a la reunión, al tiempo que un representante de Birmania asistió como huésped de Tailandia (el país anfitrión).

Muchos funcionarios de la ANSEA temen que la admisión de nuevos miembros dotados de un desarrollo económico menor, como los tres estados indochinos y Birmania, debilite la cohesión del grupo. En el aspecto económico, la ANSEA quiere reforzar su presencia dentro del foro de la APEC hablando con una sola voz. También se inclina por la ampliación de los lazos comerciales con Australia y Nueva Zelanda, dos naciones que están ansiosas de vincularse económica y políticamente con la ANSEA. Por su parte, Estados Unidos está pidiendo a los miembros de ésta que acepten la realización de ejercicios militares multilaterales en la región. Aunque el ARF nunca será el equivalente regional de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, Estados Unidos desea garantizar a los países de la zona, mediante la aplicación de acuerdos de defensa multilateral, que no se está retirando militarmente de la región.

[31] *Ibid.*, 28 de julio de 1994.

Uno de los objetivos implícitos del ARF es lograr que China participe en un diálogo sobre seguridad para disipar la sensación de amenaza que suscita el poder militar de Pekín.[32] No obstante, los miembros de la ANSEA se muestran reacios a confrontar a la República Popular en lo que respecta a sus reclamos territoriales en el Mar del Sur de China, que incluyen las islas Spratly, también reivindicadas, parcial o totalmente, por Brunei, Malasia, Filipinas, Taiwan y Vietnam. China ha reclamado casi todo el mar, pero se niega a discutir las bases legales de su reivindicación. Ya firmó, pero no ha ratificado, la Convención sobre la Ley del Mar, que contraviene su reclamo sobre las Spratly. Si bien es cierto que ha ofrecido discutir el desarrollo económico conjunto de la zona, sólo está dispuesta a hacerlo en conversaciones bilaterales con los pretendientes en pugna, un arreglo que con toda seguridad favorecería al país más grande.

En marzo, en su primera visita a Vietnam, Ramos hizo un llamado similar. No obstante, instó a los seis países involucrados a desmilitarizar el área y a explotar y desarrollar sus recursos en forma conjunta. Con todo, en vista de la falta de ratificación china de la Ley del Mar y de su negativa a discutir los aspectos legales y a participar en negociaciones multilaterales, cualquier frente común sobre las Spratly que la ANSEA y Vietnam pudieran presentar en el seno del ARF resultaría infructuoso.

Relaciones con China y Taiwan

Las relaciones entre Filipinas y la República Popular China son inestables. En el terreno económico, los vínculos entre ambos países se fortalecieron cuando sus respectivos gobiernos firmaron en junio el Protocolo de Importación y Exportación de Bienes. Este pacto comercial incrementó su intercambio de bienes hasta 800 millones de dólares en 1994, una

[32] *Ibid.*, 4 de agosto de 1994.

suma 60% superior a los 500 del año anterior. Filipinas exporta a China artículos como plátanos frescos, mangos, café, tabaco, aceite y otros derivados del coco, fertilizantes y materiales para construcción; China le vende productos como frijol de soya, maquinaria ligera y generadores de energía.

En el aspecto diplomático, a China le preocupa la relación de Filipinas con Taiwan. Ramos se reunió en febrero con el presidente taiwanés, Lee Teng-Hui, durante la visita "informal" de cuatro horas que éste realizó a Subic en el curso de una gira por el sudeste asiático en la que iba acompañado por un grupo de 40 funcionarios gubernamentales y ejecutivos de empresas. Lee prometió que autorizaría vuelos directos a Subic desde Taiwan y que exhortaría a otros taiwaneses a invertir en la antigua base naval estadunidense. Pekín convocó de inmediato al embajador filipino para protestar por la visita de Lee; luego pospuso el programado viaje a Manila de varios parlamentarios chinos. Según ciertos informes, Taiwan está empleando su influencia económica para cabildear calladamente en favor de una ley que conllevaría un reconocimiento parcial de la República china. En el Congreso hay cuatro proyectos de ley que, de ser aprobados, establecerían el reconocimiento efectivo de Taiwan, violando así la proclamada política gubernamental de reconocimiento de una sola China.

Perspectivas

Desde su acceso a la presidencia en junio de 1992, Ramos ha hecho alentadores progresos en la reorientación de la economía, estancada durante años. Informes positivos de fuentes nacionales e internacionales señalan el lento, pero firme progreso de la reforma económica emprendida por su administración, pese a la resistencia de poderosos intereses creados. El hecho de que Ramos haya ganado por un estrecho margen y, sin embargo, esté llevando a cabo reformas polémicas que afectan a grupos políticos y económicos sólidamente arraigados puede considerarse meritorio por derecho propio, a diferencia de lo acontecido con su predecesora, quien fue llevada al poder por una revuelta popular pero no logró sacar adelante reformas importantes. Una vez superados los desastres naturales, la inestabilidad política y la grave escasez de energía, 1994 ha traído consigo la comprensión del lugar exacto que ocupa la economía en circunstancias normales y de lo mucho que resta por hacer. El crecimiento experimentado por el PNB hasta mediados de 1994, de 5.1%, es insuficiente. Al parecer, el país necesita "correr más rápido sólo para permanecer en su lugar". Por ejemplo, con la tasa de crecimiento del PNB verificada el año pasado, de 2.3%, el ingreso per cápita en realidad disminuyó un poco, pues tuvo un retroceso de 0.3% atribuible al crecimiento poblacional. Y no es posible seguir responsabilizando a Marcos y sus amigos, tras ocho años de su deposición.

Además, el incremento del PNB de 1994 no se traduce en una mejoría de las condiciones de vida de la mayoría de los filipinos pobres. Su calidad de vida no ha seguido el paso de la recuperación económica. Por consiguiente, el desarrollo no puede medirse sólo con los criterios del PNB. También son relevantes otros indicadores sociales, como la mortalidad infantil, la tasa bruta de natalidad, la alfabetización, la nutrición y el acceso a la vivienda. En estos rubros, las disparidades de clase y regionales son flagrantes. Como señaló el senador Wigberto Tañada: "es evidente que en Filipinas hay dos países. Uno, muestra la boyante imagen del crecimiento y del desarrollo, y el otro, la de la decadencia y la desilusión".[33]

El desconocimiento de la población rural acerca de programas gubernamentales como "Filipinas 2000", revelado por las encuestas mencionadas anteriormente, es un signo de la incapacidad del gobierno para comunicar los objetivos nacionales a la población campesina; pero también su incapacidad de filtrar el crecimiento económico a los estratos más bajos (y populosos) de la sociedad. En efecto, una prosperidad mayor para unos, puede implicar mayor miseria para otros. Los campesinos, los arrendatarios y los habitantes de los barrios bajos, a menudo se ven obligados a abandonar las tierras que cultivan o en las que viven, sin que se les otorguen alternativas viables, para dar paso a corporaciones multinacionales y a grandes inversionistas que desean destinar esas áreas a usos industriales y comerciales, un fenómeno que los grupos defensores de los derechos humanos definen hoy en día como "agresión de desarrollo".

En consecuencia, a pesar de los signos positivos de expansión económica, a los observadores les preocupa que el crecimiento quizá no disponga de una base suficientemente amplia y que, por lo tanto, pueda no ser sustentable. La industria del país consiste en una pequeña élite formada por las corporaciones más grandes y poderosas que están inmersas en una alegre dinámica de inversiones, mientras que las compañías medias y pequeñas, que en el resto de Asia han sido la manifestación de

[33] *Philippine Daily Inquirer*, 7 de agosto de 1994.

una economía robusta, difícilmente sobreviven o no existen en Filipinas, debido a las condiciones macroeconómicas desfavorables.[34] En el programa económico de la administración de Ramos, brilla por su ausencia el compromiso de desarrollar estas industrias medias y pequeñas.

En general, Ramos ha conseguido mantener la unidad de su gobierno, evitando el tipo de muestras públicas de desacuerdo que caracterizaron al gabinete de su predecesora. Con todo, dos miembros de su equipo renunciaron a mediados de año, y se espera que otros lo hagan pronto para participar en las elecciones de mayo de 1995. Si los signos positivos de recuperación económica perduran hasta entonces, el presidente podría lograr que sus compañeros de partido resulten elegidos y mantener en un nivel mínimo las pugnas políticas, con el fin de impulsar el crecimiento del país. Pero si la economía se tambalea, la insatisfacción de los filipinos con el gobierno podría traducirse en votos para un Congreso dominado por la oposición, haciéndole más difícil a Ramos mantener el impulso de sus dos primeros años en la presidencia.

Traducción de
JORGE MANCERA

FUENTES

Asiaweek (varios números, 1994).
Constitution of the Republic of the Philippines, The (1987).
Far Eastern Economic Review (varios números, 1994).
Ibon Facts and Figures. Ibon Philippines, Manila (varios números, 1994).
Local Government Code, The (R.A. 7160)

Diversos periódicos filipinos:
Business Star (BS)
Business World (BW)
Manila Chronicle (MC)
Philippine Daily Inquirer (PDI)
Philippine Star (PS)
Today

[34] *Far Eastern Economic Review*, 16 de junio de 1994.

APÉNDICE

Nombre oficial:	República de Filipinas
Capital:	Manila
Extensión territorial:	300 000 km^2
Religión:	Mayoritariamente católica; hay una importante minoría islámica en el sur
Idioma:	El tagalo (oficial); el inglés es obligatorio en la enseñanza y de uso frecuente en la administración y las comunicaciones. En las secundarias también se enseña el español
Moneda:	Peso filipino (26.7 = 1 dólar)
Gobierno:	De régimen presidencialista, matizado por un poder legislativo bicameral
Principales miembros del Consejo de Estado	
Presidente:	Fidel V. Ramos
Vicepresidente:	Joseph Estrada
•Gabinete	
Secretario ejecutivo:	Teofisto Guingona
Planeación y Desarrollo Económico:	Cielito R. Habito
Reforma Agraria:	Ernesto D. Garilao
Relaciones Exteriores:	Roberto R. Rómulo
Agricultura:	Roberto S. Sebastián
Finanzas (interino):	Roberto F. de Ocampo
Educación, Cultura y Deportes:	Ricardo T. Gloria
Medio Ambiente y Recursos Naturales:	Ángel C. Alcalá
Salud:	Juan M. Flavier
Defensa Nacional:	Renato S. de Villa
Industria y Comercio:	Rizalino S. Navarro
Trabajo Público y Carreteras:	Gregorio R. Vigilar
Ciencia y Tecnología:	William G. Padolina
Bienestar Social y Desarrollo:	Corazón Alma G. de León
Transporte y Comunicaciones:	Jesús B. García, Jr.
Justicia:	Franklin M. Drilon
Presupuesto y Administración:	Salvador M. Enríquez, Jr.
Energía:	Francisco L. Viray
Interior y Gobierno local:	Rafael M. Alunan III

Trabajo y Empleo:	María Nieves R. Confessor
Prensa:	Jesús C. Sison
Turismo:	Vicente Carlos
Jefe del Consejo Nacional de Seguridad y Asesor Presidencial de Seguridad:	José Almonte
Jefe Presidencial del Consejo Legal:	Antonio Carpio
Presidente del Banco Central de Filipinas:	Gabriel C. Singson

DATOS DE POBLACIÓN

	1990	*1991*	*1992*	*1993*
Total (millones)	61.48	62.87	64.26	65.65
Densidad (personas por km^2)	202.3*	–	–	–

* Al 30 de junio.

Fuentes: FMI, *Estadísticas Financieras Internacionales* y *The Far East and Australasia*.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA*
(Miles de personas mayores de 15 años)

	1990	*1991*	*1992*
Agricultura, caza, silvicultura y pesca	10 185	10 403	10 867
Minería y canteras	133	150	146
Manufacturas	2 188	2 391	2 535
Electricidad, gas y agua	91	99	84
Construcción	974	1 046	1 055
Comercio, mayoreo y menudeo	3 145	3 172	3 325
Transporte, almacenes y comunicaciones	1 137	1 143	1 217
Financiamiento, seguros, bienes raíces y servicios comerciales	444	451	445
Servicios comunitarios, sociales y personales (incluye restaurantes y hoteles)	4 220	4 116	4 202
Actividades no definidas adecuadamente	15	9	23
Total de empleados	22 532	22 979	23 898
Desempleados	1 993	2 267	2 224
Total de fuerza laboral	24 525	25 246	26 122
Hombres	15 446	15 932	16 402
Mujeres	9 078	9 314	9 721

* Cifras referentes a personas civiles únicamente.

Fuente: *The Far East and Australasia*.

Costo de la vida
(Índice de precios al consumidor; base 1988 = 100)

	1990	*1991*	*1992*
Alimentos, bebidas y tabaco	127.6	147.2	157.3
Vestido	120.3	140.6	155.7
Vivienda y reparación	132.8	159.6	187.6
Combustible, luz y agua	136.0	173.3	183.1
Servicios	129.3	171.4	183.6
Varios	120.5	140.0	158.8
Total	128.1	152.0	165.6

Fuente: *The Far East and Australasia.*

Educación (1990-1991)

	Planteles	*Maestros*	*Alumnos*
Kinder	4 201	9 644	397 364
Primaria	34 081	311 013	10 427 077
Bachillerato (no técnico ni vocacional)	1 262	13 265	361 736
Educación superior	809	56 880	1 347 750

Fuente: *The Far East and Australasia.*

Comunicaciones

	1988	*1989*	*1990*
Radiorreceptores (miles)	8 000	8 300	8 600
Televisores (miles)	2 200	2 500	3 000
Teléfonos (miles)	926	932	n.d.
Libros (títulos)	1 072	n.d.	1 112
Periódicos	38	32	47

n.d.: no disponible.
Fuente: *The Far East and Australasia.*

Otros indicadores sociales (1992)
(Tasas por mil habitantes)

	Porcentaje
Natalidad	31
Mortalidad	7

Fuente: *Estado Mundial de la Infancia 1994.*

Población femenina (1990)
(Miles)

Población femenina	31 046
Población femenina económicamente activa	6 843

Fuente: *Situación de la mujer en el mundo*, 1992.

Maternidad

Esperanza de vida al nacer 1985/1990 (años)	65.4
Mortalidad materna 1980/1990 (por cada 100 000 nacidos)	93
Mortalidad infantil 1980/1990 (por cada 1 000 nacidos)	45

Fuente: *Situación de la mujer en el mundo*, 1992.

Salud (1990)

	Porcentaje
Mujeres que usan anticonceptivos	45
Nacimientos con parteros capacitados	57
Mujeres que fuman	n.d.
Hombres que fuman	78

n.d.: no disponible.
Fuente: *Situación de la mujer en el mundo*, 1992.

Matrimonio (1990)

	Porcentaje
Mujeres casadas actualmente (15 a 19 años)	14.0
Mujeres casadas actualmente (25 o más años)	61.0
Mujeres de 60 o más años, no casadas	48.0
Mujeres de 25 a 44 años, divorciadas	0.00

Fuente: *Situación de la mujer en el mundo*, 1992.

Hogar y familia

Edad media de la mujer al casarse (años)	22.4
Tasa total de fecundidad (nacimientos por mujer)	6.0
Hogares encabezados por mujeres (porcentaje del total)	11.0
Tamaño medio del hogar	5.6

Fuente: *Situación de la mujer en el mundo*, 1992.

Analfabetismo (1990)

	Porcentaje
Mujeres entre 15 y 24 años	7.6
Hombres entre 15 y 24 años	8.9
Mujeres mayores de 25 años	25.2
Hombres mayores de 25 años	19.5

Fuente: *Situación de la mujer en el mundo*, 1992.

Participación de la mujer en la vida pública

Año en que obtuvo la mujer derecho al voto	1939
Escaños parlamentarios ocupados por mujeres (porcentaje en 1987)	n.d.

n.d.: no disponible.
Fuente: *Situación de la mujer en el mundo*, 1992.

Participación de la mujer en la actividad económica (1990)

	Porcentaje
Tasa estimada de actividad económica	36
Trabajadoras independientes	29
Empleadas	37
No remuneradas	52

Fuente: *Situación de la mujer en el mundo*, 1992.

Balanza de pagos (Miles de millones de dólares)

	1990	*1991*	*1992*	*1993*
Cuenta corriente	–2 695	–1 034	–999	–3 289
Exportaciones FOB	8 186	8 840	9 824	11 375
Importaciones FOB	–12 206	–12 051	–14 519	–17 597
Balanza comercial	–4 020	–3 211	–4 695	–6 222

Fuente: FMI, *Estadísticas Financieras Internacionales.*

Cuentas nacionales (Miles de millones de pesos)

	1990	*1991*	*1992*	*1993*
Consumo del gobierno	108.8	123.1	130.5	127.3
Formación bruta de capital	257.9	250.1	293.5	352.0
Consumo privado	767.1	916.4	1 019.2	1 122.5
PIB	1 073.1	1 244.4	1 351.6	1 466.3
PIB a precios de 1990	1 073.1	1 067.7	1 074.4	1 095.6

Fuente: FMI, *Estadísticas Financieras Internacionales.*

Producto Interno Bruto por tipo de actividad económica

	1988	*1989*	*1990*
Agricultura, silvicultura y pesca	183 515	207 417	235 465
Agricultura y pesca	17 459	196 276	225 558
Silvicultura	13 056	11 141	9 907
Sector Industrial	285 445	327 667	374 505
Minería y canteras	15 275	15 446	16 659
Manufacturas	207 236	233 192	271 406
Construcción	42 814	57 281	62 044
Electricidad, gas y agua	20 120	21 748	24 396
Sector servicios	334 056	387 477	456 336
Transportes, almacenes y comunicaciones	40 762	43 840	54 345
Comercio	113 477	128 528	145 102
Financiamiento y vivienda	71 602	87 085	104 280
Otros servicios privados	57 644	67 752	80 675
Servicios gubernamentales	50 571	60 272	71 934
PIB a valores de compra	803 016	922 561	1 066 306

Fuente: *The Far East and Australasia.*

RESERVAS INTERNACIONALES
(Millones de dólares)

	1990	*1991*	*1992*	*1993*	*1994*
Oro[1]	1 124	1 280	935	1 245	1 107
Derechos especiales de giro	1	4	1	10	8
Reserva en el FMI	55	56	120	120	126
Divisas	868	3 186	4 283	4 546	6 393
Total	2 048	4 526	5 339	5 921	7 634

[1] Valuación nacional.
Fuente: FMI, *Estadísticas Financieras Internacionales.*

COMERCIO INTERNACIONAL
(Millones de dólares)

	1988	*1989*	*1990*
Importaciones (FOB)			
Alimentos y animales vivos	684.3	885.9	1 072.8
Cereales	228.2	338.6	470.9
Bebidas y tabacos	93.8	89.5	86.8
Tabaco	78.1	65.5	65.3
Materias primas, excepto combustibles	1 095.8	1 396.5	1 841.2
Combustibles minerales, lubricantes, etcétera	413.5	528.7	531.9
Petróleo y sus derivados	1 024.9	1 315.3	1 750.2
Grasas animales y vegetales, grasas y ceras	18.0	23.6	24.5
Químicos y productos relativos	1 039.1	1 214.8	1 367.3
Químicos inogránicos	112.5	142.5	147.9
Manufacturas básicas	1 238.2	1 787.5	1 793.9
Hierro y acero	475.2	742.5	571.9
Maquinaria y equipo de transporte	1 643.7	2 536.2	3 220.3
Maquinaria especializada para empresas particulares	316.5	406.7	543.5
Maquinaria y equipo para industria en general	211.4	310.5	400.4
Maquinaria eléctrica y partes	471.8	570.3	736.2
Vehículos y partes (excluye llantas, motores y partes eléctricas)	228.9	474.8	508.0
Varios artículos manufacturados	118.9	266.0	306.7
Total (incluye otros)	8 159.4	10 418.8	12 206.2

COMERCIO INTERNACIONAL *(conclusión)*

	1988	*1989*	*1990*
Exportaciones (FOB)			
Alimentos y animales vivos	1 055.9	1 100.0	1 075.3
Plátanos	146.3	146.4	149.3
Piñas enlatadas	83.2	n.d.	88.7
Coco seco	78.3	75.8	60.7
Azúcar	60.2	79.7	110.5
Aceite y otros residuos de coco (copra)	63.4	53.5	54.0
Bebidas y tabaco	32.0	33.7	57.9
Tabaco	26.5	26.3	49.0
Materias primas, excepto combustibles	708.9	728.6	545.6
Copra	28.0	25.2	20.5
Corcho y madera	173.1	160.7	33.6
Madera simple y durmientes de ferrocarril	156.5	136.2	19.4
Minerales metálicos y chatarra de metal	382.5	423.4	361.6
Cobre y sus concentrados	216.2	237.4	206.6
Minerales de cobre y concentrados	118.0	109.4	89.8
Combustibles minerales, lubricantes, etcétera	152.8	118.1	180.7
Petróleo y sus derivados	131.3	83.4	131.3
Grasas animales y vegetales, grasas y ceras	425.4	392.3	375.5
Aceite de coco (crudo y refinado)	408.1	376.8	360.7
Químicos y productos relativos	256.4	278.6	24.8
Químicos orgánicos	86.6	82.8	66.9
Manufacturas básicas	687.0	741.1	763.5
Chapa, madera terciada y otras maderas	105.0	62.0	77.2
Metales no ferrosos	306.1	344.9	290.9
Maquinaria y equipo de transporte	676.2	940.1	1 019.9
Maquinaria y partes eléctricas	554.0	617.2	641.7
Varios artículos manufacturados	953.1	1 195.9	1 341.4
Vestido (excluye calzado)	440.6	570.7	681.5
Total (incluye otros)	7 074.2	7 820.7	8 186.0

Fuente: *The Far East and Australasia.*

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
(Miles de dólares)

	1989	*1990*	*1991*
Importaciones (FOB)			
Alemania, Rep. Federal	408 287	532 132	465 444
Arabia Saudita	250 839	546 238	642 862
Australia	347 331	369 435	380 167
Brasil	224 431	205 279	n.d.
Brunei	47 424	109 792	n.d.
China, Rep. Pop.	221 105	162 102	223 499
Corea, República de	422 859	477 993	608 637
Emiratos Árabes Unidos	278 738	464 580	n.d.
Estados Unidos	1 978 990	2 365 126	2 426 278
Francia	165 995	151 222	140 269
Hong Kong	481 130	554 578	595 989
Indonesia	157 826	181 563	162 227
Japón	2 043 224	2 232 046	2 372 879
Kuwait	172 272	194 295	n.d.
Malasia[1]	141 683	171 200	297 905
Nueva Zelanda	94 253	87 609	n.d.
Países Bajos	203 112	20 256	144 176
Reino Unido	170 817	247 886	214 930
Singapur	492 550	486 660	455 275
Taiwan	701 799	805 570	824 597
Total (incluye otros)	10 418 821	12 206 161	12 051 363
Exportaciones (FOB)			
Alemania, Rep. Federal	334 855	390 373	502 393
Arabia Saudita	57 099	63 951	59 458
Australia	124 338	96 382	103 898
Canadá	127 424	122 895	n.d.
China, Rep. Popular	50 235	61 764	127 769
Corea, República de	175 246	229 504	227 921
Estados Unidos	2 796 273	2 988 174	3 143 653
Francia	152 154	143 946	164 845
Hong Kong	304 784	330 470	391 620
Indonesia	56 182	60 937	41 943
Japón	1 585 857	1 615 978	1 771 301
Malasia	98 478	125 263	123 266
Países Bajos	329 224	357 081	338 416
Reino Unido	328 591	350 531	371 642
Singapur	220 795	239 632	299 454
Tailandia	154 972	156 449	n.d.
Taiwan	210 298	209 263	209 722
Total (incluye otros)	7 820 713	8 186 028	8 839 514

n.d.: no disponible.
Fuente: *The Far East and Australasia.*

RELACIONES COMERCIALES MÉXICO-FILIPINAS
(Miles de dólares)

							Porcentaje	
Año	*Exportaciones*	*Cambio anual*	*Importaciones*	*Cambio anual*	*Balance*	*Cambio anual*	*Exportaciones*	*Importaciones*
1980	5 660	–	5 217	–	443	–	0.04	0.03
1981	88 920	1 471.02	2 501	–52.06	86 419	19 407.67	0.44	0.01
1982	29 350	–66.99	3 929	57.10	25 421	–70.58	0.14	0.03
1983	73 295	149.73	19 360	392.75	53 935	112.17	0.33	0.21
1984	801	–98.91	1 872	–90.33	–1 071	–101.99	0.00	0.02
1985	3 801	374.53	1 077	–42.47	2 724	–354.34	0.02	0.01
1986	4 954	30.33	1 197	11.14	3 757	37.92	0.03	0.01
1987	4 861	–1.88	1 875	56.64	2 986	–20.52	0.02	0.01
1988	3 689	–24.11	2 442	30.24	1 247	–58.24	0.02	0.01
1989	7 453	102.03	12 269	402.42	–4 816	–486.21	0.03	0.05
1990	2 556	–65.71	6 725	–45.19	–4 169	–13.43	0.01	0.02
1991	3 133	22.57	19 414	188.68	–16 281	290.53	0.01	0.05
1992	3 911	24.83	29 410	51.49	–25 499	56.62	0.01	0.06
1993	3 530	–9.74	43 647	48.41	–40 117	57.33	0.02	0.10
1994	2 683	n.d.	28 924	n.d.	–26 241	n.d.	n.d.	n.d.

n.d.: no disponible.
Fuente: Banco de México.